





CONSTITUCIONES ESTATALES UBICADAS POR "VOCES"

Constitución del Estado de San Luis Potosí

Teléfono: 50 36 00 00 Ext: 67033 y 67036 E-mail: claudia.gamboa@congreso.gob.mx

COMISIÓN BICAMARAL DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS

SECRETARÍA GENERAL

Lic. Graciela Báez Ricárdez Secretaria General

SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS

Lic. Hugo Christian Rosas de León Secretario

DIRECIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN, INFORMACIÓN Y ANÁLISIS

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS

Lic. Víctor L. Muñoz Ortiz Encargado de Despacho

SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE POLÍTICA INTERIOR

Mtra. Claudia Gamboa Montejano Subdirectora Coautora / Responsable

Lic. Arturo Ayala Cordero, Asistente de Investigación, Coautor

Lic. Fidias Viveros Gascón, Auxiliar de Investigación.

Mayra Aseneth Hernández Álvarez Auxiliar

SAPI-ISS-01-19 Enero, 2019

CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

FICHA TÉCNICA:

Denominación: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis

Potosí:

Fuente Página electrónica del Congreso del Estado de San Luis Potosí,

consultada: http://congresosanluis.gob.mx/legislacion/leyes

Fecha de consulta:

20 de noviembre de 2018

Fecha última 18 de

de reforma:

18 de septiembre de 2018

Fecha de

8 de octubre de 1917

promulgación:

Número total

de artículos: 139

ESTRUCTURA (ÍNDICE) DE LA CONSTITUCIÓN:

TÍTULO PRIMERO

DEL ESTADO, SU FORMA DE CAPÍTULO II (18)

GOBIERNO. DE LA DEFENSÓRÍA SOCIAL

SOBERANÍA Y TERRITORIO TÍTULO CUARTO
CAPÍTULO ÚNICO (1 a 5) DE LA POBLACIÓN
TÍTULO SEGUNDO CAPÍTULO I (19 a 23)

DE LOS PRINCIPIOS DE LOS HABITANTES DEL ESTADO

CONSTITUCIONALES CAPÍTULO II (24 a 29)

CAPÍTULO ÚNICO (6 a 16) DE LOS CIUDADANOS POTOSINOS

TÍTULO TERCERO TÍTULO QUINTO

DE LOS ORGANISMOS DE DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS DEFENSORÍA SOCIAL CIUDADANOS EN LOS PROCESOS

CAPÍTULO I (17) ELECTORALES, EN EL

DE LA COMISIÓN ESTATAL DE REFERÉNDUM Y EN EL

DERECHOS HUMANOS PLEBISCITO

CAPÍTULO I BIS (17 Bis) CAPÍTULO I (30 a 35)

DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DEL SUFRAGIO GARANTÍA DE ACCESO A LA CAPÍTULO II (36 a 37)

INFORMACIÓN PÚBLICA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

CAPÍTULO III (38 a 39) DEL REFERÉNDUM Y PLEBISCITO TÍTULO SEXTO **DEL PODER LEGISLATIVO CAPÍTULO I (40 a 41) DEL CONGRESO DEL ESTADO** CAPÍTULO II (42 a 50) DE LA ELECCIÓN E INSTALACIÓN **DEL CONGRESO** CAPÍTULO III (51 a 56) DE LAS SESIONES Y RECESOS **DEL CONGRESO CAPÍTULO IV (57 a 58)** DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONGRESO **CAPÍTULO V (59 a 60)** DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE CAPÍTULO VI (61 a 71) DE LA INICIATIVA Y FORMACIÓN **DE LEYES** TÍTULO SÉPTIMO **DEL PODER EJECUTIVO CAPÍTULO I (72 a 79)** DEL GOBERNADOR DEL ESTADO **CAPÍTULO II (80 a 81)** DE LAS ATRIBUCIONES DEL **GOBERNADOR** CAPÍTULO III (82 a 84) DEL DESPACHO DEL EJECUTIVO **CAPITULO IV (85 a 86)** DEL MINISTERIO PÚBLICO CAPÍTULO V (87) DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL **ESTADO** CAPÍTULO VI (88 a 89) DE LA SEGURIDAD PÚBLICA TÍTULO OCTAVO **DEL PODER JUDICIAL CAPÍTULO I (90 a 95) DISPOSICIONES GENERALES CAPÍTULO II (96 a 100)** DEL SUPREMO TRIBUNAL DE

JUSTICIA

CAPÍTULO III (101 a 106) DE LOS JUECES DE PRIMERA **INSTANCIA** Y JUECES MENORES **CAPÍTULO IV (107 a 108)** DE LOS JUECES AUXILIARES **TÍTULO NOVENO** DEL PATRIMONIO Y DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO **CAPÍTULO I (109 a 110) DEL PATRIMONIO CAPÍTULO II (111 a 113)** DE LA HACIENDA PÚBLICA TÍTULO DÉCIMO **DEL MUNICIPIO LIBRE** CAPÍTULO I (114 a 116) DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO **CAPÍTULO II (117 a 118)** DE LOS REQUISITOS PARA SER MIEMBRO DEL AYUNTAMIENTO. CONCEJO MUNICIPAL O DELEGADO CAPÍTULO III (119 a 120) DE LA FORMACIÓN, FUSIÓN Y SUPRESIÓN DE MUNICIPIOS Y DELEGACIONES MUNICIPALES CAPÍTULO IV (121 a 122) DE LA SUSPENSIÓN Y DESAPARICIÓN DE AYUNTAMIENTOS Y DE LA SUSPENSIÓN Y REVOCACIÓN DEL MANDATO DE ALGUNO DE SUS **INTEGRANTES** TÍTULO DÉCIMO PRIMERO DE LA JUSTICIA PENAL CAPÍTULO ÚNICO (122 BIS y 122 TER) TÍTULO DECIMOSEGUNDO DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA TRIBUNAL ESTATAL **JUSTICIA ADMINISTRATIVA (123)** TITULO DECIMOTERCERO RESPONSABILIDADES, DE LAS JUICIO POLITICO, Y SISTEMA ANTICORRUPCION

Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis de Política Interior

CAPÍTULO ÚNICO (124 a 130)
TÍTULO DECIMOCUARTO
PREVENCIONES GENERALES
CAPÍTULO ÚNICO (131 a 136)
TÍTULO DECIMOQUINTO
DE LAS REFORMAS E
INVIOLABILIDAD A LA
CONSTITUCION.
CAPÍTULO I
DE LAS REFORMAS (137 a 138)
DE LAS REFORMAS
CAPÍTULO II (139)
DE LA INVIOLABILIDAD
ARTÍCULOS TRANSITORIOS

"VOCES"	SAN LUIS POTOSÍ
	TÍTULO PRIMERO DEL ESTADO, SU FORMA DE GOBIERNO, SOBERANÍA Y TERRITORIO
ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y JURÍDICA	CAPÍTULO ÚNICO ARTÍCULO 1o El Estado de San Luis Potosí es la organización política y jurídica de sus habitantes, nacidos o avecindados en su territorio, que tengan las calidades que exige la presente Constitución.
ESTADO/ LIBRE Y SOBERANO	ARTÍCULO 20 El Estado es parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos; es libre y soberano en cuanto a su régimen
RÉGIMEN INTERIOR	interior, sin más limitaciones que aquéllas que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece a las Entidades Federativas.
PODERES PÚBLICOS	ARTÍCULO 3o El Estado de San Luis Potosí adopta para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, laico, y popular, y lo ejerce por medio de los poderes, Legislativo; Ejecutivo; y Judicial. En ningún momento podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo. Los Poderes del Estado no tendrán más atribuciones que las que les confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente Constitución, y las leyes que de ellas emanen.
SOBERANÍA	ARTÍCULO 4o La soberanía del Estado radica esencial y originariamente en el pueblo potosino, quien la ejerce a través de los Poderes del Estado. Éstos residirán en la ciudad de San Luis Potosí, capital del Estado. El Ejecutivo, cuando las circunstancias lo ameriten, solicitará la aprobación del Congreso del Estado para que la residencia de los Poderes sea trasladada a otro lugar de la entidad por el tiempo que considere conveniente.
ESTADO/ TERRITORIO	ARTÍCULO 5o El territorio del Estado es el que de hecho y por derecho le pertenece y que le es reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Su extensión y límites sólo podrán modificarse por virtud, y conforme a los procedimientos que en aquella y en esta Constitución se señalan. El Estado tiene como base de su división territorial y de su organización política y administrativa al Municipio Libre. Los Municipios que integran el Estado son los establecidos por la Ley Orgánica del Municipio Libre.
	TÍTULO SEGUNDO DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES CAPÍTULO ÚNICO

CONSTITUCIÓN/ SUPREMACÍA	ARTÍCULO 6o La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución son la ley suprema del Estado. Las leyes y demás ordenamientos que de ellas emanen conforman su estructura jurídica. Para la prevalencia y conservación del estado de derecho, todas las autoridades y servidores públicos, así como todos los habitantes del Estado estarán obligados a respetar y obedecer dichas leyes.
	ARTÍCULO 7o En el Estado de San Luis Potosí la protección
DERECHOS, GARANTÍAS INDIVIDUALES Y SOCIALES	de los derechos de sus habitantes y la permanente búsqueda del interés público son la base y objeto de las instituciones políticas y sociales.
	Para la convivencia armónica de sus habitantes, queda
DERECHOS HUMANOS	asegurado el goce irrestricto de los derechos humanos y las
7701111 11100	garantías individuales y sociales consagradas en la Constitución
	Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los
	tratados internacionales, las que el Estado adopta como propias.
	Las autoridades estatales y municipales deberán respetar y
	hacer respetar tanto dichas garantías, como los derechos
	humanos, conforme lo dispongan las leyes reglamentarias y
	ordinarias respectivas, así como los tratados internacionales de
DERECHOS HUMANOS/	la materia.
INTERPRETACIÓN	Las normas relativas a los derechos humanos serán
	interpretadas de conformidad con lo dispuesto en la Constitución
	Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los tratados
	internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las
	personas la protección más amplia.
DERECHOS HUMANOS/	Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen
AUTORIDADES	la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los
	derechos humanos de conformidad con los principios de
	universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
	En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar,
	sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en
	los términos que establezca la ley.
	ARTÍCULO 8º. En el Estado de San Luis Potosí todas las
HABITANTES/ LIBRES E IGUALES	personas son libres e iguales en dignidad y derechos.
	El varón y la mujer son iguales ante la ley. El Estado promoverá
EQUIDAD DE GÉNERO	la igualdad de oportunidades de los varones y las mujeres
GENERU	potosinos en la vida pública, económica, social y cultural.
DISCRIMINACIÓN/ PROHIBICIÓN	Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico
	o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición
	social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las
	preferencias sexuales, el estado civil, o cualquier otra que atente
	contra la dignidad humana, y tenga por objeto anular o
	menoscabar los derechos y libertades de las personas.
	ARTICULO 9°. El Estado de San Luis Potosí tiene una
	ANTIOCEO 3. El Estado de Sall Edis i otosi tielle dila

PUEBLOS INDÍGENAS/ DERECHOS Y OBLIGACIONES

composición pluriétnica, pluricultural y multilingüística sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Reconoce la existencia histórica y vigente en su territorio de los pueblos Nahuas, Teének o Huastecos, y Xi´oi o Pames, así como la presencia regular de los Wirrarika o Huicholes.

Asegurando la unidad de la Nación la ley establecerá sus derechos y obligaciones conforme a las bases siguientes:

- Queda prohibida toda discriminación por origen étnico, o que por cualquier otro motivo atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas;
- II. El Estado reconoce a sus pueblos indígenas su unidad, lenguas y derechos históricos, manifiestos éstos en sus comunidades indígenas a través de sus instituciones políticas, culturales, sociales y económicas, así como su actual jurisdicción territorial, formas autonómicas de gestión y capacidad de organización y desarrollo internos;
- III. Las comunidades integrantes de un pueblo indígena son aquellas que forman una unidad política, social, económica y cultural; asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. La ley establecerá los mecanismos y criterios para la identificación y delimitación de las mismas, tomando en cuenta además de los anteriores, los criterios etnolingüísticos;
- IV. La conciencia de su identidad étnica deberá ser criterio fundamental para determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos y comunidades indígenas. Las propias comunidades coadyuvarán en ultima instancia a este reconocimiento:
- V. El Estado reconoce el derecho de los pueblos indígenas y sus comunidades a la libre determinación, misma que se expresa en el ámbito de su autonomía; ella bajo el principio de la subsidiariedad y complementariedad en correspondencia con el marco del orden jurídico vigente;
- VI. El Estado otorga a las comunidades indígenas la calidad de sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propios;
- VII. Se reconoce la estructura interna de las comunidades indígenas, concebida como un sistema que comprende una asamblea general, diversos cargos y jerarquías;
- VIII. En el ámbito de su autonomía las comunidades indígenas podrán preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que formen parte de su cultura e identidad. El Estado coadyuvará en la preservación, enriquecimiento de sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que conformen su identidad cultural;

IX. Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal podrán coordinarse y asociarse en los términos y para los efectos que prevenga la ley;

x. En los términos que establece la Constitución federal y las demás leyes de la materia, y dentro de los ámbitos de competencia del Estado y municipios, los pueblos y comunidades indígenas tendrán derecho a la preservación de la naturaleza, y de los recursos que se encuentran ubicados en sus tierras o en la totalidad del hábitat que ocupan o disfrutan, así como preferencia en el uso y disfrute de los mismos;

XI. La jurisdicción indígena y sus competencias se corresponden con la organización social y el espacio geográfico o territorios donde se asientan las comunidades. Las comunidades indígenas elegirán y designarán a sus representantes y órganos de autoridad internos, y ante los ayuntamientos, en correspondencia con sus sistemas normativos y formas de organización comunitaria. La ley reglamentaria establecerá las bases al respecto, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad;

XII. Mediante acciones coordinadas entre los distintos órdenes de gobierno, las autoridades municipales determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades indígenas administrarán directamente para fines específicos;

XIII. El Estado garantizará a los indígenas el efectivo acceso a la jurisdicción del mismo. Para garantizar este derecho, en los juicios y procedimientos en que aquéllos sean parte, individual o colectivamente, deberán tomarse en cuenta sus costumbres y especificidades culturales;

XIV. La ley establecerá los casos y procedimientos para que los sistemas normativos que las comunidades indígenas utilizan para la solución y regulación de sus conflictos internos, sean validados por los jueces y tribunales correspondientes. Las personas indígenas tendrán derecho a contar durante todo el procedimiento, con el auxilio de un traductor y un defensor que tengan conocimiento de su lengua y cultura;

xv. La ley reconocerá y protegerá a los indígenas pertenecientes a otro pueblo, o que procedentes de otra Entidad federativa residan temporal o permanentemente dentro del territorio del Estado, y

XVI. Al tenor de lo dispuesto en el Apartado B del artículo 2º de la Constitución federal, el Estado y los municipios con la participación de las comunidades establecerán las instituciones, el sistema y las políticas para garantizar el desarrollo humano y social de los pueblos y comunidades indígenas. La ley incorporará las bases que la Constitución federal refiere, y

establecerá procedimientos los mecanismos y para el cumplimiento de esta obligación en los siguientes aspectos: Impulso al desarrollo regional. Incremento en todos los ámbitos a los niveles de educación con uso del idioma indígena correspondiente, además del características español. incorporando las interculturales específicas. c) Acceso efectivo a todos los servicios de salud con aprovechamiento de la medicina tradicional. Mejoramiento de la vivienda, y ampliación de cobertura de todos los servicios sociales básicos. Incorporación de las mujeres al desarrollo. Ampliación de la red de comunicaciones, y posibilidad para los pueblos y comunidades indígenas para adquirir y operar sus propios medios de comunicación. Impulso a las actividades productivas y al desarrollo sustentable de las comunidades. h) Establecimiento de políticas para la protección de los migrantes indígenas y sus familias. Consulta a los pueblos indígenas para la elaboración de los planes Estatal y municipales sobre el desarrollo integral. El Congreso del Estado y los ayuntamientos en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán equitativamente las partidas específicas en los presupuestos de egresos que aprueben, para cumplir con las disposiciones de este artículo, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en su ejercicio y vigilancia. El Estado reconoce los mismos derechos a las comunidades que sean equiparables a las descritas en el contenido de este artículo. Es responsabilidad del Congreso del Estado vigilar que todas las leyes o decretos de observancia obligatoria, sean publicadas en el Periódico Oficial del Estado en las lenguas propias de los pueblos indígenas de la Entidad para su aplicación y entrada en **ARTÍCULO 10.-** Todas las personas tienen el derecho de recibir EDUCACIÓN/ educación. La educación que imparta el Estado en todos sus DERECHO tipos y modalidades será gratuita. La educación preescolar, primaria, secundaria, y media superior, serán obligatorias. **EDUCACIÓN** La educación que imparte el Estado será laica y tendrá por LAICA objeto el pleno desarrollo de todas las facultades del ser humano. Promoverá el amor a la patria y a sus símbolos; fomentará el respeto a los derechos humanos; fortalecerá la identidad estatal y la conciencia en los valores de la independencia nacional, la libertad, la justicia, la democracia, la EDUCACIÓN/ dignidad v la solidaridad social.

PRINCIPIOS	La educación en el Estado estará regida por los criterios y
	lineamientos que la Constitución Política de los Estados Unidos
	Mexicanos establece en relación a la democracia, su carácter
	nacional, sus contenidos y las condiciones para la mejor
	convivencia humana, la dignidad de las personas, el respeto a
	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
EDUCACIÓN/	los derechos humanos, la integridad de la familia y el interés
ESTADO, PLANES Y	general de la sociedad.
PROGRAMAS	El Estado, acorde a lo dispuesto por el artículo 3º de la Carta
	Magna Federal, garantizara la calidad en la educación
	obligatoria, ante todo buscará que los materiales y métodos
	educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa,
	así como la idoneidad de los docentes y los directivos,
	garanticen el máximo logro de aprendizaje de los estudiantes.
	El Ejecutivo del Estado coadyuvará con la Federación en el
EDUCACIÓN/	establecimiento de los planes y programas de estudio de la
PARTICULARES	educación preescolar, primaria, secundaria, media superior, y
	normal, considerando la opinión de los ayuntamientos y de los
EDUCACIÓN/	sectores sociales involucrados en la educación, en los términos
CALIDAD	de las leyes respectivas; asimismo, promoverá y apoyará la
	educación científica y tecnológica.
	Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y
	modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado
	otorgará, y retirará, el reconocimiento de validez oficial a los
	estudios que se realicen en planteles particulares.
_	ARTÍCULO 11 La Universidad de San Luis Potosí es autónoma
EDUCACIÓN/ SUPERIOR	en todo lo que respecta a su régimen interior. Realizará sus fines
SUPERIOR	de educar, investigar y difundir la cultura con base en la libertad
	de cátedra e investigación y en el libre examen y discusión de las
	ideas, de conformidad con lo establecido en la Constitución
	Política de los Estados Unidos Mexicanos, en esta Constitución y
	en su ley orgánica. El Estado, en la medida de sus posibilidades
	presupuestales, la dotará con un subsidio anual.
	<u> </u>
FAMILIA	ARTICULO 12 La Familia constituye la base fundamental de la
GRUPOS	sociedad. La familia, las personas con discapacidad, los
VULNERABLES	senectos y los niños y las niñas serán objeto de especial
	protección por parte de las autoridades, y las disposiciones
DERECHO A LA	legales que al efecto se dicten serán de orden público e interés
SALUD	social.
	El Estado protegerá y promoverá el derecho fundamental a la
SALUD Y	salud de sus habitantes. La ley establecerá programas y
ALIMENTACIÓN/ DERECHO	estrategias basadas en la educación para la salud y en la
	participación comunitaria.
NIÑOS	El Estado en la medida de sus posibilidades presupuestales,
ALIMENTACIÓN,	proveerá la salud de los niños y las niñas, las personas con
SALUD, EDUCACIÓN Y ESPARCIMIENTO/	discapacidad y los adultos mayores.
DERECHO	En todas las decisiones y actuaciones del Estado, se velará y

	cumplirá con el principio del interés superior de la niñez,
	garantizando de manera plena sus derechos. Este principio
	deberá guiar el diseño, seguimiento, ejecución, y evaluación de
	las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los niños y las niñas
	tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de salud,
	educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Los
	ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar y
	exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. Las
ALIMENTACIÓN	autoridades proveerán lo necesario para propiciar el respeto a la
	dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos, y
	otorgarán facilidades a los particulares para que coadyuven al
	cumplimiento de los derechos de la niñez.
	El Estado garantizará el acceso de toda persona a una
	alimentación suficiente, nutricionalmente adecuada, inocua y
	culturalmente aceptable para llevar una vida activa y saludable.
	A fin de evitar las enfermedades de origen alimentario, el Estado
BIENESTAR SOCIAL	deberá implementar las medidas que propicien la adquisición de
	buenos hábitos alimenticios entre la población, y fomentará la
PATRIMONIO FAMILIAR	producción y el consumo de alimentos con alto valor nutricional.
I AMILIAN	El Estado promoverá el bienestar social, así como la vivienda
	digna para las familias, preferentemente la destinada a las clases
	de escasos recursos económicos, de conformidad con lo
ESPACIO PÚBLICO	establecido por las leyes relativas.
DE CALIDAD	Las leyes regularán el patrimonio de la familia y los bienes que lo
	constituyan serán inalienables y no estarán sujetos a embargo ni
	a gravamen.
	El Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí reconoce como
	un Derecho Humano el acceso al agua de calidad.
	ARTÍCULO 13 El Estado reconoce y garantiza el derecho de
DERECHO A LA PROPIEDAD	propiedad en los términos que establece la Constitución Política
FROFIEDAD	de los Estados Unidos Mexicanos.
	Las autoridades asumirán el ejercicio de todas las atribuciones
REMISIÓN	que les confiere el artículo 27 de la Constitución Política de los
AL ART. 27	Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, el Congreso expedirá
CONST. FEDERAL	leyes para regular el aprovechamiento de las aguas que no sean
	propiedad nacional y se localicen en dos o más predios;
	1'''
	asegurar dentro del territorio del Estado el respeto a las
	disposiciones constitucionales sobre capacidad para adquirir el
	dominio de las tierras, aguas, bosques y sus accesiones; y
	establecer los procedimientos para el fraccionamiento y
	enajenación de las extensiones que llegaran a exceder los
	límites previstos en la misma. También expedirá las leyes que
_	sean necesarias para definir y garantizar la propiedad pública, la
EXTINCIÓN DE	de uso común, la privada y la social.
DOMINIO	El dominio de los bienes se extinguirá por declaración judicial a
	petición del Ministerio Público, conforme a la ley que para tal fin

	se expida, previo procedimiento que se regirá por las reglas
	siguientes:
	Será jurisdiccional y autónomo del de materia penal; Dragadará an las agas de acquestra raba de vahículas trata.
	II. Procederá en los casos de secuestro, robo de vehículos, trata
	de personas, y enriquecimiento ilícito, respecto de los bienes
	siguientes:
	a) Aquéllos que sean instrumento, objeto o producto del delito,
	aún cuando no se haya dictado la sentencia que determine la
	responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para
	determinar que el hecho ilícito sucedió.
	b) Aquéllos que no sean instrumento, objeto o producto del
	delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o
	mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se reúnan
	los extremos del inciso anterior.
	c) Aquéllos que estén siendo utilizados para la comisión de
	delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no
	lo notificó a la autoridad, o hizo algo para impedirlo.
	d) Aquéllos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son producto
	de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y el
	acusado por estos delitos se comporte como dueño, y
	III. Toda persona que se considere afectada podrá interponer los
	recursos respectivos, para demostrar la procedencia lícita de los
	bienes y su actuación de buena fe, así como que estaba
	impedida para conocer la utilización ilícita de sus bienes.
	ARTÍCULO 14 Con la participación democrática de la sociedad,
DESARROLLO, PARTICIPACIÓN	compete al Gobierno del Estado la formulación de los planes y
DEMOCRÁTICA	programas de desarrollo del Estado para la consecución de una
SOCIAL	existencia digna y justa de sus habitantes.
MEDIO AMBIENTE/	ARTÍCULO 15 Todos los habitantes del Estado tienen derecho
MEDIO AMBIENTE/ DERECHO	a gozar de un ambiente sano, por lo que, en la esfera de su
	competencia y concurrentemente con los Ayuntamientos, el
	Gobierno del Estado llevará a cabo programas para conservar,
	proteger y mejorar los recursos naturales de la entidad, así como
	para prevenir y combatir la contaminación ambiental. Las leyes
	que al efecto se expidan serán de orden público e interés social y
	fomentarán la cultura de protección a la naturaleza, el
	mejoramiento del ambiente, el aprovechamiento racional de los
	recursos naturales y la protección y propagación de la flora y la
	fauna existentes en el territorio del Estado. ARTICULO 16 El Estado de San Luis Potosí reconoce la vida
DERECHO A LA VIDA	humana como fundamento de todos los derechos de los seres
	humanos, por lo que la respeta y protege desde el momento de
	su inicio en la concepción. Queda prohibida la pena de muerte, la
	cual no podrá aplicarse en ningún caso.
APORTO	No es punible la muerte dada al producto de la concepción,
ABORTO	140 00 pariibio la macrio dada ai producto de la comoepcion,

	cuando sea consecuencia de una acción culposa de la mujer; el embarazo sea resultado de una violación o de una inseminación indebida; o de no provocarse el aborto la mujer corra peligro de muerte.
	TÍTULO TERCERO
	DE LOS SISTEMAS DE PROTECCION DE DERECHOS,
	Y EL MEDIO DE ATENCION DE CONTROVERSIAS
	CAPÍTULO I
	De los Sistemas de protección de Derechos
	ARTICULO 17 El Congreso del Estado expedirá las leyes a las
SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE	
DERECHOS	que deban ajustarse los servidores públicos y las autoridades,
	para facilitar el acceso al ejercicio de los derechos de sus
	ciudadanos; esos ordenamientos deberán atender:
SISTEMA DE	I. El sistema de protección no jurisdiccional de derechos
PROTECCIÓN DE DERECHOS	humanos. El que corresponde a la Comisión Estatal de Derechos
HUMANOS	Humanos, que es un organismo público, de participación
	ciudadana y de servicio gratuito; dotado de plena autonomía
	presupuestal, técnica y de gestión; qué tiene por objeto esencial
	la protección, observancia, promoción, estudio y difusión de los
	derechos humanos.
	La Comisión será la encargada de conocer de las peticiones,
	•
	quejas y denuncias en contra de los actos y omisiones de
	naturaleza administrativa, provenientes de cualquier autoridad o
	servidor público, estatal o municipal, que violen los derechos
	humanos reconocidos por el orden jurídico mexicano e
	internacional; pero no será competente para conocer de asuntos
	electorales, y jurisdiccionales. Sus recomendaciones serán
	públicas, autónomas y no vinculatorias; y podrá presentar
	denuncias y quejas ante las autoridades respectivas.
SISTEMA PENAL	La ley determinará la organización, integración y atribuciones de
ACUSATORIO	la Comisión;
	II. El sistema penal acusatorio y oral. En el Estado de San Luis
	Potosí se garantiza la tutela integral en el acceso a la justicia y la
	protección a las víctimas, ofendidos, testigos y, en general, de
	todos los sujetos que intervengan en el proceso.
	Para cumplimentar estos fines y derechos en beneficio de los
	habitantes del Estado, el proceso penal será acusatorio y oral,
	con la misma configuración de principios, reglas, garantías y
	derechos a favor del imputado, la víctima o el ofendido,
	asumidos por la Constitución Política de los Estados Unidos
	Mexicanos y que en lo concerniente el Estado adopta como
	propios.
	La ley establecerá las bases para fijar el lugar y establecimientos
	donde los sentenciados deban compurgar la pena de prisión
	impuesta por los jueces y tribunales.
	Los jueces de ejecución de sentencias controlarán y vigilarán la
	Los jueces de ejecución de sentencias controlaran y vigilaran la

SISTEMA PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA legalidad y respeto a los derechos del sentenciado.

Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño, y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial, y

III. El sistema para garantizar el acceso a la información pública. En el Estado de San Luis Potosí es derecho humano de todas las personas, conocer y acceder a la información pública, con las excepciones previstas en esta Constitución, y en la ley de la materia.

COMISIÓN ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Toda persona tiene el derecho a acceder a la información sobre sí misma o sus bienes, asentada en archivos, bases de datos y registros públicos o privados de quienes tengan el carácter de entes obligados conforme a la ley; así como a actualizar, rectificar, suprimir o mantener en reserva dicha información, en los términos de la ley. En cualquier caso, la ley protegerá a las personas contra cualquier lesión en sus derechos, resultante del tratamiento de sus-datos personales.

SISTEMA ESTATAL DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVOS La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública es un organismo especializado, imparcial, y colegiado responsable de garantizar el derecho de acceso a la información, y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, conforme a los principios y bases establecidos por el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y la Ley General que establece las bases, principios generales, y procedimientos del ejercicio de este derecho.

Dependiente de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública habrá un Sistema Estatal de Documentación y Archivos, responsable de aplicar las regulaciones que se establezcan en materia de administración y sistematización de la documentación e información, en posesión de las entidades públicas.

La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública estará integrada por tres comisionados numerarios; y tres supernumerarios, que serán electos por cuando menos el voto de las dos terceras partes de los miembros del Congreso del Estado, previo procedimiento que iniciará con una convocatoria abierta para la presentación de solicitudes y propuestas.

Los comisionados durarán en su cargo cuatro años y, en ese tiempo, sólo podrán ser removidos de éste en los términos del Título Duodécimo de ésta Constitución, así como del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CAPÍTULO I BIS De la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la

	Información Publica
	ARTICULO 17 BIS DEROGADO
	CAPÍTULO II
	· ·
CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES	Medio de Atención de Controversias ARTÍCULO 18 Toda persona tendrá derecho a la adecuada defensa, representación y asesoramiento de sus derechos ante las autoridades estatales en toda controversia jurisdiccional. La ley organizará la Defensoría Pública, que se encargará de representar, patrocinar, asesorar y defender en forma gratuita a las personas que carezcan de medios económicos para contratar servicios de un abogado particular. El servicio que brinde la Defensoría Pública se prestará bajo los principios de probidad, honradez, profesionalismo, calidad, y de manera obligatoria en términos que establezca la ley. El Estado asegurará las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores públicos. En materia penal, la Defensoría Pública proporcionará una defensa técnica y de calidad a los indiciados, imputados, acusados, y sentenciados, que no tengan defensor. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público y, a su vez, éstas no serán inferiores a las de aquéllos. La Defensoría tendrá autonomía técnica y de gestión. Las autoridades estatales y municipales están obligadas a colaborar con las funciones de la Defensoría Pública del Estado. El Estado prestará la asesoría en materia laboral, a través de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, de conformidad con lo establecido en la ley de la materia. Tratándose de personas indígenas que no hablen o comprendan suficientemente el español, la Defensoría Pública asignará un defensor bilingüe y garantizará que en todo el juicio o procedimiento se cumpla con la garantía de la asistencia de un traductor o intérprete, tomando en cuenta sus costumbres y
	especificidades culturales del pueblo indígena y comunidad indígena a la que pertenezcan, para proporcionar una defensa
	técnica y de calidad sustentada en la legislación estatal, federal y los tratados internacionales.
	TÍTULO CUARTO
	DE LA POBLACIÓN
	CAPÍTULO I
	De los Habitantes del Estado
HABITANTES/	ARTÍCULO 19 Son habitantes del Estado las personas que
OBLIGACIONES	residan en forma permanente o temporal en él.
	Los habitantes están obligados a:
	I Cumplir con lo establecido en las leyes vigentes en el Estado y
	los reglamentos de los municipios donde residan y respetar a las

	autoridades legalmente constituidas;
	II Tener un modo honesto de vivir;
	III Contribuir para los gastos públicos del Estado y del Municipio
	en que residan, de la manera proporcional y equitativa que
	establezcan las leyes;
	IV Inscribir a sus hijos en el Registro Civil dentro del plazo legal;
	V Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas
	públicas o privadas para obtener la educación primaria y
	secundaria obligatorias;
	VI Asistir, cuando lo designe la autoridad competente del lugar
	donde residan, a recibir instrucción cívica, así como a realizar el
	servicio militar respectivo;
	VII Inscribirse y proporcionar la información que se requiera
	para la integración de censos, padrones o registros de carácter
	público con fines estadísticos, catastrales, de reclutamiento para
	el servicio de las armas, civiles o de otra índole, en la forma y
	términos que establezcan las leyes; y
	VIII En los casos de riesgo, siniestro o desastre graves, prestar
	colaboración a las autoridades y el auxilio necesario a los
	damnificados.
	Quienes se encuentren transitoriamente en el territorio del
	Estado estarán sujetos a sus leyes y ordenamientos jurídicos en
POTOSINOS/	cuanto les sean aplicables.
CALIDAD DE	ARTÍCULO 20 La calidad de potosino se adquiere por
	nacimiento o por vecindad.
POTOSINOS/	ARTÍCULO 21 Son potosinos por nacimiento:
POR NACIMIENTO	I Los nacidos dentro del territorio del Estado; y
	II Los nacidos fuera del territorio del Estado, siempre que sean
	hijos de padre o madre potosinos por nacimiento.
DOTOCINOS/	ARTÍCULO 22 Son potosinos por vecindad los mexicanos que
POTOSINOS/ POR VECINDAD	se avecinen en el territorio del Estado y tengan una residencia
	efectiva de cuando menos dos años.
	Se entenderá por residencia efectiva el hecho de tener dentro del
	territorio del Estado o municipio que corresponda, un domicilio
	fijo en que se habite permanentemente.
	La residencia efectiva y la calidad de potosino por vecindad no
	se pierden por ausentarse del Estado o del municipio
	correspondiente, siempre que en ellos se conserve el domicilio
	fijo y sea con motivo del desempeño de un cargo público o de
	, ,
	elección popular, de comisiones oficiales o por razones de
	trabajo o estudios, a condición de que no tengan carácter
	permanente y de que se mantengan los vínculos y relaciones en
	el Estado o municipio correspondiente y no se adquiera otra
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	vecindad o residencia.
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

	por más de dos años, salvo lo previsto en el párrafo anterior.
POTOSINOS/ PREFERENCIA	ARTÍCULO 23 Los potosinos, en igualdad de circunstancias,
	tendrán preferencia frente a los nacidos en cualquier otra parte
	del territorio de la República Mexicana o a los extranjeros, para
	obtener toda clase de concesiones, empleos, cargos o
	comisiones del gobierno, en que no sea indispensable la calidad
	de ciudadano potosino.
	CAPITULO II
	De los Ciudadanos Potosinos
	ARTÍCULO 24 Son ciudadanos del Estado los varones o
CIUDADANO/ REQUISITOS	mujeres que tengan la calidad de potosinos y reúnan, además,
	los siguientes requisitos:
	I Haber cumplido dieciocho años; y
	II Tener un modo honesto de vivir.
	ARTÍCULO 25 Son obligaciones de los ciudadanos potosinos:
CIUDADANOS/ OBLIGACIONES	I Desempeñar los cargos de elección popular para los que sean
	electos que, en ningún caso, serán gratuitos;
	II Inscribirse en el padrón electoral en los términos que
	determine la ley de la materia;
	III Desempeñar las funciones electorales que les sean
	asignadas por la autoridad competente; y
	IV Votar en las elecciones populares en los términos que
	señale la ley.
CHIDADANOS/	ARTÍCULO 26 Son prerrogativas de los ciudadanos potosinos:
CIUDADANOS/ PRERROGATIVAS	I. Votar en las elecciones populares y consultas ciudadanas que
	lleven a cabo las autoridades competentes;
	II Poder ser votados para todos los cargos de elección popular
	y nombrados para ocupar cualquier empleo o comisión, teniendo
	las calidades que esta Constitución y las leyes establezcan;
CANDIDATURAS CIUDADANAS	El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad
CIODADANAS	electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los
	ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y
	cumplan con los requisitos, condiciones y términos que
	determine la legislación;
	III Ejercer individual y libremente el derecho de asociarse y
	reunirse para tomar parte en forma pacífica en los asuntos
	políticos del Estado y los Municipios; y
	IV Las demás que les confieren la presente Constitución y las
	leyes que de ella emanen.
CIUDADANOS/	ARTÍCULO 27 Las prerrogativas de los ciudadanos potosinos
PRERROGATIVAS,	se suspenden:
SUSPENSIÓN	I Cuando dejen de cumplir, sin causa justificada, cualquiera de
	las obligaciones que establece el artículo 25 de esta
	Constitución. En este caso la suspensión será de un año y sin
	perjuicio de las penas que por los mismos hechos señale la ley, y

	en su caso, lo previsto en el tercer párrafo del artículo 132 de
	esta Constitución;
	II Si han sido condenados por delito que merezca pena
	privativa de libertad, desde la fecha en que la sentencia quede
	firme, hasta su cumplimiento;
	III Por encontrarse prófugos de la justicia, desde que se dicte la
	orden de aprehensión, hasta que prescriba la acción penal;
	IV Por incapacidad legal declarada en sentencia firme que
	imponga como pena esta suspensión; y
	V En los demás casos que señalen la Constitución Política de
	los Estados Unidos Mexicanos y las leyes.
01104041007	ARTÍCULO 28 La ciudadanía potosina se pierde:
CIUDADANOS/ PÉRDIDA DE	I Por la pérdida de la nacionalidad o de la ciudadanía mexicana;
ESTATUS	II Por adquirir voluntariamente la ciudadanía de otra entidad
	federativa; y
	III En los demás casos que señalen la Constitución Política de
	los Estados Unidos Mexicanos y las leyes.
	ARTÍCULO 29 La ley fijará el procedimiento para la pérdida y
CIUDADANOS/ DERECHOS O	suspensión de los derechos o prerrogativas del ciudadano, el
PRERROGATIVAS	tiempo de la suspensión, las causas y el procedimiento para su
	rehabilitación.
	TÍTULO QUINTO
	DE LA PARTICIPACION DE LOS CIUDADANOS EN LOS
	PROCESOS ELECTORALES, EN EL REFERENDUM Y EN EL
	PLEBISCITO
	CAPÍTULO I
	Del Sufragio
	ARTÍCULO 30 El sufragio es el derecho que otorga la ley a los
PROCESO ELECTORAL/	ciudadanos para participar en la vida política del Estado y
SUFRAGIO	constituye un deber cívico y legal que se ejerce a través del voto
	para expresar la voluntad soberana del individuo. El voto deberá
	ser libre, universal, secreto y directo. Las autoridades
	garantizarán la libertad y secreto del mismo.
	Los ciudadanos potosinos que residan en el extranjero podrán
DERECHO AL VOTO	ejercer su derecho al voto en la elección de Gobernador del
EN EL EXTRANJERO	Estado, en los términos que disponga la Ley Electoral del Estado
	de San Luis Potosí.
	de San Luis Potosí. Corresponde a los ciudadanos potosinos partidos políticos y a
	de San Luis Potosí. Corresponde a los ciudadanos potosinos partidos políticos y a las autoridades electorales locales y federales, administrativas y
	de San Luis Potosí. Corresponde a los ciudadanos potosinos partidos políticos y a las autoridades electorales locales y federales, administrativas y jurisdiccionales, cada una en ámbito de su competencia, la
	de San Luis Potosí. Corresponde a los ciudadanos potosinos partidos políticos y a las autoridades electorales locales y federales, administrativas y jurisdiccionales, cada una en ámbito de su competencia, la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales,
	de San Luis Potosí. Corresponde a los ciudadanos potosinos partidos políticos y a las autoridades electorales locales y federales, administrativas y jurisdiccionales, cada una en ámbito de su competencia, la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales, así como velar porque los mismos se lleven a cabo bajo los
	de San Luis Potosí. Corresponde a los ciudadanos potosinos partidos políticos y a las autoridades electorales locales y federales, administrativas y jurisdiccionales, cada una en ámbito de su competencia, la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales, así como velar porque los mismos se lleven a cabo bajo los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia,
	de San Luis Potosí. Corresponde a los ciudadanos potosinos partidos políticos y a las autoridades electorales locales y federales, administrativas y jurisdiccionales, cada una en ámbito de su competencia, la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales, así como velar porque los mismos se lleven a cabo bajo los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia, máxima publicidad, objetividad y equidad.
	de San Luis Potosí. Corresponde a los ciudadanos potosinos partidos políticos y a las autoridades electorales locales y federales, administrativas y jurisdiccionales, cada una en ámbito de su competencia, la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales, así como velar porque los mismos se lleven a cabo bajo los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia,

PROPAGANDA GUBERNAMENTAL	de los ciudadanos; además, establecerá los medios de impugnación para garantizar que los actos de los organismos electorales se ajusten a lo dispuesto por esta Constitución y las leyes que de ella emanen. Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales, y hasta la conclusión de la jornada electoral, deberá suspenderse toda difusión de propaganda gubernamental en los medios de comunicación social, tanto de los poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los ayuntamientos y sus delegaciones. Se exceptúa de lo anterior la información que difundan las autoridades electorales, las relativas a servicios de salud y el ámbito educativo, así como a la protección civil en casos de emergencia.
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA/ COMPETENCIA	ARTICULO 31. El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana es un organismo de carácter permanente, autónomo, independiente en sus decisiones y funcionamiento; con personalidad jurídica y patrimonio propios; encargado de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y reglamentarias de la materia electoral; de preparar, desarrollar y vigilar los procesos electorales estatales y municipales; así como los procesos de consulta ciudadana; integrado conforme lo disponga la ley respectiva. La calificación de las elecciones de Gobernador, diputados locales, y ayuntamientos, corresponde al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana o, en su caso, al Instituto Nacional Electoral, de conformidad con la Constitución Federal y de acuerdo a las leyes federales y locales electorales. El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana es competente para imponer las sanciones administrativas, por infracción a las disposiciones electorales, en los términos que
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA/ INTEGRACIÓN	establezca la ley. El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana contará con un órgano de dirección superior integrado por un consejero Presidente y seis consejeros electorales, con derecho a voz y voto; un secretario ejecutivo y representantes de los partidos políticos y, en su caso, el representante del candidato independiente a Gobernador del Estado; quienes concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz. Los consejeros electorales integrantes del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana durarán en su encargo un periodo de siete años y no podrán ser reelectos; percibirán una remuneración acorde con sus funciones; serán nombrados por el
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA/ INTEGRANTES	Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y podrán ser removidos por causas graves que establezca la ley. Los consejeros electorales y demás servidores públicos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, no

podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en actividades docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia. Tampoco podrán asumir un cargo público en los órganos emanados de las elecciones en cuya organización y desarrollo hubieren participado, ni ser postulados para un cargo de elección popular o asumir un encargo de dirigencia partidista, durante los dos años posteriores al término de su encargo.

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA/ CONTRALORÍA INTERNA

ARTICULO 31 BIS. El órgano interno de control del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, contará con autonomía técnica y de gestión, para decidir sobre su funcionamiento; tiene encomendada la fiscalización de los ingresos y egresos del Consejo; así como las funciones de control y vigilancia de los servidores públicos del mismo, excepción hecha de los consejeros ciudadanos.

El titular del órgano interno de control será electo, previa convocatoria pública, por el Congreso del Estado, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, y sólo podrá ser removido por las causas y en la forma que establezca la Ley Electoral del Estado.

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO

ARTICULO 32 El Tribunal Electoral del Estado es el órgano jurisdiccional de única instancia y especializado en materia electoral en el Estado; gozará de autonomía técnica, gestión en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones. Este deberá cumplir sus funciones bajo los principios de, certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad.

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO/ INTEGRANTES

El Tribunal Electoral del Estado no formará parte del Poder Judicial del Estado, y se integra por tres magistrados que actuarán en forma colegiada, y permanecerán en su encargo durante siete años.

Los magistrados electorales serán electos en forma escalonada por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, de conformidad con lo que establecen, la Constitución Federal, y las leyes generales en materia electoral que de ella emanen.

Los magistrados electorales serán responsables de resolver los medios de impugnación interpuestos en contra de todos los actos y resoluciones electorales locales, en términos de las leyes locales en la materia.

Durante el período de su encargo, los magistrados electorales no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación de la autoridad electoral jurisdiccional local, y de los que desempeñe en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia, no remunerados.

Todas las sesiones del Tribunal Electoral del Estado serán

	públicas.
SISTEMA DE MEDIO DE IMPUGNACIÓN/ MATERIA ELECTORAL	ARTICULO 33. La ley establecerá el sistema de medios de impugnación jurisdiccionales, por los cuales deban resolverse las controversias que se susciten con motivo de los procesos electorales locales, así como las derivadas de los actos y resoluciones que emitan las autoridades electorales locales. Estos procedimientos jurisdiccionales tienen por objeto garantizar los principios de, certeza y definitividad de las diferentes etapas de los procesos electorales, así como el de legalidad de los actos y resoluciones de las autoridades en la materia. En materia electoral los recursos se tramitarán en términos de la ley local de la materia.
PROCESO ELECTORAL/ PADRÓN ELECTORAL	ARTÍCULO 34 La ley regulará y garantizará el desarrollo de los procesos electorales y el ejercicio auténtico del sufragio. Los organismos electorales competentes, con la participación de los partidos políticos y la colaboración del Gobierno, promoverán la actualización permanente del padrón electoral del Estado.
	ARTÍCULO 35 DEROGADO
	CAPÍTULO II De los Partidos Políticos
PARTIDOS POLÍTICOS/ DEFINICIÓN	ARTICULO 36. Los partidos políticos son entidades de interés público que tienen como fin promover la participación de los ciudadanos en la vida democrática, y hacer posible el acceso de sus candidatos, mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo de los electores, al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas postulados por aquellos;
PARIDAD DE GÉNERO EN LOS PROCESOS ELECTORALES	así como las reglas para garantizar la paridad entre de conformidad con los procedimientos que establezcan sus estatutos para la postulación de candidatos. Los partidos políticos que participen en los procesos electorales locales para integración del Congreso del Estado, deberán garantizar la paridad entre los géneros en la totalidad de sus candidaturas, por ambos principios, debiendo sus fórmulas estar compuestas por candidatos del mismo género. En los procesos electorales municipales que se rigen por el principio de mayoría relativa, los partidos políticos promoverán la postulación de una proporción paritaria de candidatos de ambos géneros.
	En el caso de las candidaturas a los Ayuntamientos postulados por cada partido político se regirá por el principio de paridad horizontal. Las planillas deberán integrarse por candidatos propietarios y suplentes del mismo género. Las listas de representación proporcional en cargos de elección

	municipal, se conformarán y asignarán bajo el principio de paridad de género en propietarios y suplentes.
PARTIDOS POLÍTICOS/ PRERROGATIVAS Y DERECHOS	ARTICULO 37. Con las prerrogativas y derechos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los partidos políticos con registro nacional o estatal tiene derecho a participar en los procesos electorales que se lleven a cabo en el Estado, siempre y cuando observen lo dispuesto por las leyes federales y locales en la materia. Para conservar el registro o inscripción que da acceso a las prerrogativas económicas en el Estado, los partidos políticos deberán obtener por lo menos el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones locales, ya sea para la elección del Poder Ejecutivo, o Poder Legislativo, en el último proceso electoral.
	CAPÍTULO III
	Del Referéndum y Plebiscito
CONSULTA CIUDADANA	ARTICULO 38. La consulta ciudadana es el mecanismo de participación por el cual los potosinos ejercen su derecho a través del voto emitido, y mediante el cual expresan su opinión respecto de uno o varios temas de trascendencia estatal o municipal. Esta Constitución reconoce como instrumentos de consulta ciudadana, el referéndum y plebiscito. La ley en la materia establecerá las materias, requisitos, alcances, términos y
REFERÉNDUM TOTAL O PARCIAL	procedimientos para llevarla a cabo. Los poderes Legislativo, y Ejecutivo, podrán someter, a través del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, a referéndum total o parcial de los ciudadanos potosinos, las reformas a la legislación estatal, en materias trascendentales o de especial interés para la vida en común, excepto las de carácter tributario o fiscal; así como las reformas a la Constitución del Estado y a las leyes locales, que deriven de reformas o adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los ciudadanos de la Entidad podrán solicitar al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, que someta a referéndum total o parcial, las reformas legislativas, en los términos del párrafo anterior. La ley establecerá las materias, requisitos, alcances, términos y procedimiento a que se sujetará el referéndum. El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana resolverá, con base en la trascendencia de la materia y en el cumplimiento de los requisitos que establezca la ley, sobre la procedencia del mismo.
	ARTICULO 39. El Gobernador del Estado, mediante plebiscito y
PLEBISCITO/ ASPECTOS, SUJETOS	a través del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, podrá someter a consulta de los ciudadanos

	potosinos, los actos que pretenda llevar a cabo y los convenios que proyecte celebrar con organismos públicos o privados. En los mismos términos, el Congreso del Estado podrá llevar a cabo el plebiscito respecto de los actos que pretenda efectuar con relación a la formación, supresión o fusión de municipios. Los ayuntamientos, en las mismas condiciones, podrán solicitar al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, que someta a plebiscito de los ciudadanos de sus respectivos municipios, los actos que pretendan efectuar, así como los convenios que tengan programado celebrar con otros municipios, entidades o particulares. Los ciudadanos del Estado podrán solicitar que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, lleve a cabo el plebiscito respecto de los actos que el Ejecutivo del Estado o los ayuntamientos vayan a ejecutar. El plebiscito sólo procederá cuando se trate de actos trascendentales o de especial interés para la vida en común. La ley establecerá las materias, requisitos, alcances, términos y
	procedimiento para llevarlo a cabo.
	TÍTULO SEXTO
	DEL PODER LEGISLATIVO
	CAPITULO I
PODER	Del Congreso del Estado
LEGISLATIVO/ CONGRESO	ARTICULO 40. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en
	una asamblea de Diputados, que se denomina Congreso del
	Estado, la cual se elegirá cada tres años.
DIPUTADOS/	ARTÍCULO 41 Los Diputados son inviolables por las opiniones
OPINIONES, INMUNIDAD,	que manifiesten en el desempeño de su encargo y jamás podrán
FUERO	ser reconvenidos ni procesados por ellas.
	El Presidente del Congreso o de la Diputación Permanente, en
	su caso, velará por el respeto a la inmunidad de los Diputados y
i	por la inviolabilidad del registo la rielativa
	por la inviolabilidad del recinto legislativo.
	CAPITULO II
CONGRESO/	CAPITULO II De la Elección e Instalación del Congreso
CONGRESO/ INTEGRACIÓN	CAPITULO II De la Elección e Instalación del Congreso ARTÍCULO 42 El Congreso del Estado se integra con quince
	CAPITULO II De la Elección e Instalación del Congreso ARTÍCULO 42 El Congreso del Estado se integra con quince Diputados electos por mayoría relativa y hasta doce Diputados
	CAPITULO II De la Elección e Instalación del Congreso ARTÍCULO 42 El Congreso del Estado se integra con quince Diputados electos por mayoría relativa y hasta doce Diputados electos según el principio de representación proporcional. Por
	CAPITULO II De la Elección e Instalación del Congreso ARTÍCULO 42 El Congreso del Estado se integra con quince Diputados electos por mayoría relativa y hasta doce Diputados electos según el principio de representación proporcional. Por cada Diputado propietario se elegirá un suplente.
INTEGRACIÓN CONGRESO/	CAPITULO II De la Elección e Instalación del Congreso ARTÍCULO 42 El Congreso del Estado se integra con quince Diputados electos por mayoría relativa y hasta doce Diputados electos según el principio de representación proporcional. Por cada Diputado propietario se elegirá un suplente. ARTÍCULO 43 Los partidos políticos con derecho a participar
INTEGRACIÓN	CAPITULO II De la Elección e Instalación del Congreso ARTÍCULO 42 El Congreso del Estado se integra con quince Diputados electos por mayoría relativa y hasta doce Diputados electos según el principio de representación proporcional. Por cada Diputado propietario se elegirá un suplente. ARTÍCULO 43 Los partidos políticos con derecho a participar en las elecciones locales podrán postular un candidato para cada
INTEGRACIÓN CONGRESO/	CAPITULO II De la Elección e Instalación del Congreso ARTÍCULO 42 El Congreso del Estado se integra con quince Diputados electos por mayoría relativa y hasta doce Diputados electos según el principio de representación proporcional. Por cada Diputado propietario se elegirá un suplente. ARTÍCULO 43 Los partidos políticos con derecho a participar en las elecciones locales podrán postular un candidato para cada distrito uninominal y una lista de doce candidatos para ser
INTEGRACIÓN CONGRESO/	CAPITULO II De la Elección e Instalación del Congreso ARTÍCULO 42 El Congreso del Estado se integra con quince Diputados electos por mayoría relativa y hasta doce Diputados electos según el principio de representación proporcional. Por cada Diputado propietario se elegirá un suplente. ARTÍCULO 43 Los partidos políticos con derecho a participar en las elecciones locales podrán postular un candidato para cada distrito uninominal y una lista de doce candidatos para ser electos por el principio de representación proporcional en la
INTEGRACIÓN CONGRESO/	CAPITULO II De la Elección e Instalación del Congreso ARTÍCULO 42 El Congreso del Estado se integra con quince Diputados electos por mayoría relativa y hasta doce Diputados electos según el principio de representación proporcional. Por cada Diputado propietario se elegirá un suplente. ARTÍCULO 43 Los partidos políticos con derecho a participar en las elecciones locales podrán postular un candidato para cada distrito uninominal y una lista de doce candidatos para ser electos por el principio de representación proporcional en la circunscripción estatal.
INTEGRACIÓN CONGRESO/	CAPITULO II De la Elección e Instalación del Congreso ARTÍCULO 42 El Congreso del Estado se integra con quince Diputados electos por mayoría relativa y hasta doce Diputados electos según el principio de representación proporcional. Por cada Diputado propietario se elegirá un suplente. ARTÍCULO 43 Los partidos políticos con derecho a participar en las elecciones locales podrán postular un candidato para cada distrito uninominal y una lista de doce candidatos para ser electos por el principio de representación proporcional en la

ELECCIÓN BOD AMBOS	de Diputados de representación proporcional, con el propósito de
POR AMBOS PRINCIPIOS	garantizar que un partido político no pueda contar con un número de diputados por ambos principios que representen un
	porcentaje del total de la legislatura que no exceda en ocho
	puntos su porcentaje de votación emitida, así como de que el
	porcentaje de representación de un partido político no sea menor
	al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales.
	El máximo de Diputados por ambos principios que puede
	alcanzar un partido político es de quince; esta base no aplica al
	partido político que, por sus triunfos en distritos uninominales,
	obtenga quince o más curules.
DIPUTADOS/	ARTÍCULO 45 Sólo serán asignados Diputados por el sistema
REPRESENTACIÓN	de representación proporcional a los partidos políticos que
PROPORCIONAL	cumplan con los requisitos que señale la Ley Electoral.
DIPUTADOS/	ARTÍCULO 46 Para ser Diputado se requiere:
REQUISITOS	I Ser ciudadano potosino en ejercicio de sus derechos;II. Tener la calidad de potosino por nacimiento con residencia
	efectiva en el Estado no menor de seis meses inmediatos
	anteriores al día de la elección y, si se trata de potosino por
	vecindad, la residencia efectiva inmediata anterior al día de la
	elección deberá ser no menor de tres años, a partir de la
	adquisición de la calidad de vecino;
	III. No tener una multa firme pendiente de pago, o que
	encontrándose sub júdice no esté garantizada en los términos de
	las disposiciones legales aplicables, que haya sido impuesta por
	responsabilidad con motivo de los cargos públicos que hubiere desempeñado en la administración federal, estatal o municipal; y
	no haber sido condenado por sentencia firme por la comisión de
	delitos dolosos que hayan ameritado pena de prisión; y
	IV Tener como mínimo veintiún años de edad al día de la
	elección.
DIPUTADOS/	ARTÍCULO 47 No pueden ser Diputados:
INELEGIBILIDAD	I El Gobernador del Estado;
	II. Los secretarios, subsecretarios, El Fiscal General del Estado,
	ni los titulares de los organismos descentralizados o desconcentrados de la administración; o a los que ésta
	Constitución otorga autonomía;
	III Los funcionarios de elección popular de los Ayuntamientos;
	IV. Los miembros de las Fuerzas Armadas que estén en servicio
	activo o que tengan mando en el Estado, así como los que
	ejerzan mando y atribuciones en la policía del distrito en donde
	se celebre la elección;
	V Los ministros de culto religioso.
	VI. Los Magistrados y secretarios del Tribunal Electoral del
	Estado; el Consejero Presidente o los consejeros electorales del

	Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el secretario ejecutivo, o personal profesional directivo del propio Consejo, salvo que se hubiere separado de su encargo tres años antes del día de la elección; VII Los Magistrados y Jueces del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, no podrán ser electos en la Entidad de sus respectivas jurisdicciones; IV. No ser titular de alguno de los organismos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga autonomía, ni ser Secretario o Subsecretario de Estado, ni titular de alguno de los organismos descentralizados o descentralizados de la administración pública federal; V. No ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni Magistrado o juez federal, ni Magistrado o Secretario del
	Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni Consejero Presidente o consejero electoral del Consejo General, local o distritales del Instituto Nacional
	Electoral, ni Secretario Ejecutivo, Director Ejecutivo o personal profesional directivo del propio Instituto, salvo que se hubiere separado de su encargo tres años antes del día de la elección; VI. No ser servidor público de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, en el ámbito federal, con atribuciones de mando, y en
	ejercicio de autoridad; VII. No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional,
	salvo que se separe del cargo tres años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate;
	VIII. No ser Senador, Diputado Federal o miembro de un Ayuntamiento, salvo que se separe del cargo noventa días antes de la elección, y
	IX. No ser funcionario municipal con atribuciones de mando.
DIPUTADOS RELECCIÓN	ARTICULO 48. Los Diputados podrán ser electos hasta por cuatro períodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.
	Los diputados que pretendan reelegirse deberán separarse de su cargo noventa días antes de la elección solicitando licencia respectiva, pudiendo reincorporarse el día posterior de la elección. Los diputados electos como candidatos independientes
	sólo podrán ser reelectos bajo esta misma figura.
DIPUTADOS/ INCOMPATIBILIDAD	ARTÍCULO 49. Los diputados, desde el día en que rindan protesta de su encargo hasta aquél en que concluya el mismo, no podrán desempeñar, sin previa licencia del Congreso o de la Diputación Permanente, comisiones, cargos o empleos en los
	gobiernos, federal, estatal o municipal por los que devenguen

sueldo; en cuyo caso cesarán en sus funciones representativas mientras dure la licencia. Los diputados suplentes, en ejercicio de sus funciones, están sujetos al mismo requisito. Se exceptúa de esta prohibición el empleo en el ramo de la educación pública. La infracción de este artículo se sancionará con la pérdida del cargo de Diputado. La Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí, establecerá el procedimiento respectivo.

CONGRESO/ INSTALACIÓN LEGISLATURA, QUÓRUM

ARTÍCULO 50.- La Legislatura electa deberá instalarse en sesión solemne el día catorce de septiembre del año de su elección. Los Diputados deberán rendir la protesta de ley ante la Diputación Permanente de la Legislatura saliente.

El Congreso del Estado no puede instalarse ni ejercer sus funciones sin la concurrencia de más de la mitad del número total de sus miembros. Si la sesión de instalación excepcionalmente no pudiera celebrase por falta de guorum, los diputados presentes deberán reunirse el día señalado por la ley y compeler a los ausentes a que concurran dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, con la advertencia de que si no lo hicieran, perderán su cargo, en cuyo caso serán llamados en forma inmediata los suplentes, quienes deberán presentarse en un plazo igual y, si tampoco concurrieran, se declarará vacante la diputación. Si se tratara de un Diputado de mayoría, se convocará a nuevas elecciones; en el caso de Diputados de representación proporcional, se llamará al suplente y, en su defecto, al siguiente del orden de la lista que haya registrado el partido a quien correspondió la representación vacante.

Si en las sesiones posteriores a su instalación no hubiere quórum para que el Congreso ejerza sus funciones, los diputados que concurran convocarán inmediatamente a los suplentes para que se presenten a desempeñar su cargo, entretanto transcurre el término de cuarenta y ocho horas antes señalado.

Incurrirán en responsabilidad y se harán acreedores a las sanciones que la ley prevenga quienes, habiendo sido electos Diputados, no se presenten sin causa justificada, a juicio del Congreso, a desempeñar el cargo dentro del plazo señalado en este artículo. También incurrirán en responsabilidad, que la misma ley sancionará, los partidos políticos que, habiendo postulado candidatos, acuerden que sus miembros que resultaron electos no se presenten a desempeñar sus funciones.

DIPUTADOS/ LICENCIA

CAPÍTULO III De las Sesiones y Recesos del Congreso

ARTÍCULO 51.- El Diputado que no concurra a tres sesiones consecutivas sin previa licencia del Congreso, o sin causa justificada calificada por la Directiva del mismo, cesará en el

	desempeño de su cargo. En este caso será llamado, desde
	luego, su suplente, quien tendrá derecho a percibir las dietas
	correspondientes.
	ARTÍCULO 52 El Congreso Estado tendrá anualmente dos
CONGRESO/ SESIONES	períodos ordinarios de sesiones. El primero comenzará el quince
OLO/O/ILO	de septiembre y concluirá el quince de diciembre; y el segundo,
	que será improrrogable, comenzará el uno de febrero y concluirá
	'
	el treinta de junio. El primer período se podrá ampliar hasta por
	un mes más, si se considera indispensable, según las
	necesidades públicas o a petición del Titular del Ejecutivo.
	Cuando concluido un período ordinario de sesiones el Congreso
	esté conociendo de un juicio político o una declaración de
	procedencia, lo prorrogará hasta pronunciar su resolución, sin
	ocuparse de ningún otro asunto.
	La Ley Orgánica del Congreso señalará las formalidades con
	que deban celebrarse la apertura y clausura de las sesiones.
CONGRESO/	ARTÍCULO 53. En el primer período ordinario de sesiones, el
SESIONES, LEY DE INGRESO Y	Congreso del Estado se ocupará de preferencia de aprobar las
PRESUPUESTO DE	leyes de ingresos del Estado y las de los municipios, así como de
EGRESO	examinar y aprobar el presupuesto de egresos que le presente el
	Ejecutivo, correspondiente al año entrante. De igual forma se
	ocupará del análisis y, en su caso, aprobación del informe
	general e informes individuales que le presente la Auditoría
	Superior del Estado, respecto de la revisión de las cuentas
	públicas del Estado; de los municipios y de sus organismos
	descentralizados; de los organismos constitucionales
	autónomos; y las demás entidades auditables, relativas al año
	próximo anterior.
	En el segundo periodo, el Congreso del Estado se ocupará con
	la misma preferencia, del inicio y revisión de las cuentas públicas
CONGRESO/ CUENTA PÚBLICA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	de los poderes del Estado; de los municipios y de sus
	organismos descentralizados; de los organismos autónomos; y
	demás entidades auditables, relativas al año próximo anterior,
	para lo cual contará con el apoyo de la Auditoría Superior del
	Estado, de conformidad con el procedimiento que establezca la
	ley de la materia.
	La Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado deberá
	presentarse en forma anual al Congreso del Estado y, en sus
	recesos, a la Diputación Permanente, a más tardar el día quince
	del mes de marzo del año siguiente al que corresponda su
	ejercicio.
	Además, las entidades del Poder Ejecutivo del Estado, del Poder
	Judicial, el Poder Legislativo, los municipios, los organismos
	municipales descentralizados, y los organismos constitucionales
	autónomos, rendirán un informe trimestral de su situación
	financiera, a más tardar el día quince del mes siguiente al

periodo de que se trate, conforme lo dispuesto en la ley.

Las cuentas públicas de los poderes, Legislativo, y Judicial; de los organismos constitucionales autónomos, así como de los municipios, se entregarán en forma anual al Congreso del Estado y, en sus recesos, a la Diputación Permanente, a más tardar el día quince de marzo del año siguiente al de su ejercicio, previo conocimiento, en el caso de los municipios de sus cabildos; del Poder Legislativo de la Diputación Permanente; en el caso del Poder Judicial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado sesionando en Pleno; y, en general, de los órganos de gobierno, o de quien haga las funciones de éstos; en todos los casos, con independencia de que sean o no aprobadas.

Lo mismo aplicará para el caso de las cuentas públicas de los organismos municipales descentralizados y demás entes auditables, previo conocimiento de sus juntas de gobierno o juntas directivas, con independencia de que sean aprobadas o no, deberán ser presentadas en forma anual al Congreso del Estado y, en sus recesos, a la Diputación Permanente, a más tardar el día quince de marzo del año siguiente al de su ejercicio.

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO/ COMPETENCIA **ARTICULO 54.** Corresponde al Congreso del Estado, a través de la Auditoría Superior del Estado, la revisión de las cuentas públicas de los poderes del Estado y demás entes auditables, con el fin de comprobar que se cumplan las normas, presupuestos, obras, metas, acciones y programas.

La Auditoría Superior del Estado gozará de autonomía para desarrollar sus facultades de fiscalización, así como para decidir sobre su funcionamiento y organización interna en los términos que disponga la ley. La función de fiscalización se regirá por los principios de legalidad, prosecución del interés público, imparcialidad, confiabilidad, y eficacia.

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO/ FUNCIONES

La Auditoría Superior del Estado deberá entregar al Congreso

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO/ INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Estado, los informes. Generales individuales correspondientes a las cuentas públicas de los poderes del Estado, de los organismos constitucionales autónomos, de los municipios, de los organismos municipales descentralizados y demás entes auditables, a más tardar el día treinta y uno de octubre del año en que éstas hayan sido presentadas; a efecto de que éste revise a más tardar el día quince del mes de noviembre, que los informes se realizaron apegados a las disposiciones legales aplicables y emita, en su caso, las observaciones correspondientes. Dichos informes incluirán los resultados de la revisión de las cuentas públicas, y el apartado correspondiente a la fiscalización y verificación del cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas estatales y municipales, que comprenderá los comentarios y observaciones de los auditados.

	La ley garantizará y dispondrá las formas en que el Auditor Superior del Estado tenga y ejerza las siguientes atribuciones:
	I. Determinar daños y perjuicios;
	II. Promover acciones y responsabilidades, incluidas las referidas
	en el Título Décimo Segundo de esta Constitución, ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, la Fiscalía
	Especializada en combate a la corrupción, o ante las autoridades
AUDITORÍA SUPERIOR DEL	que competa, y III. Presentar denuncias y querellas
ESTADO/ TITULAR	La Auditoría Superior del Estado debe guardad reserva de sus
MOLAR	actuaciones y observaciones hasta que rinda los informes a que se refiere este artículo; la ley establecerá las sanciones
	aplicables a quienes infrinjan esta disposición.
	El Auditor Superior del Estado estará al frente de la Auditoría
	Superior del Estado, y será nombrado por el Congreso del
AUDITORÍA	Estado, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros
SUPERIOR DEL	presentes.
ESTADO/ TITULAR,	El Auditor Superior del Estado durará en su cargo siete años; podrá ser ratificado bajo las mismas reglas de votación por un
REQUISITOS	período inmediato y por igual término; deberá contar con
	experiencia de cinco años en materia de control, auditoría
	financiera y de responsabilidades.
	Para ser titular de la Auditoría Superior del Estado se requiere
	cumplir con los mismos requisitos previstos en las fracciones, I;
	II, IV, V, y VI del artículo 99, de esta Constitución, y los que al
	efecto se señalen en la ley.
CONGRESO/	ARTÍCULO 55 El Congreso tendrá periodos extraordinarios de sesiones siempre que fuere convocado por la Diputación
SESIONES EXTRAORDINARIAS	Permanente, la que lo acordará por sí o a solicitud fundada del
	titular del Ejecutivo o de algún Diputado. Su duración será sólo
	por el tiempo preciso para cumplir su objeto, sin que pueda
	ocupar más tiempo que el que requiera el examen de los asuntos
	expresados en la convocatoria respectiva.
CONGRESO/	ARTÍCULO 56 Si el Congreso estuviere en período
SESIONES EXTRAORDINARIAS	extraordinario de sesiones cuando deba comenzar el ordinario,
	cesará aquél y abrirá éste, en el que se ocupará preferentemente de los asuntos que estaba tratando.
	CAPITULO IV
	De las Atribuciones del Congreso
CONGRESO/ ATRIBUCIONES	ARTÍCULO 57 Son atribuciones del Congreso:
	I Dictar, abrogar y derogar leyes;
	II Iniciar ante el Congreso de la Unión las leyes y decretos que
	sean de la competencia de éste, así como la reforma, abrogación
	y derogación de unas y otros;
	III Legislar, dentro del ámbito de su competencia, en materia de asentamientos humanos y desarrollo urbano, así como de uso y
	ascritamientos namanos y desamono dibano, así como de dso y

- aprovechamiento de aguas de jurisdicción estatal;
- IV.- Expedir la ley que establezca los procedimientos para el fraccionamiento y enajenación de las extensiones que llegaren a exceder los límites señalados en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
- V.- Expedir leyes concurrentes con las federales en materia de protección al ambiente y de restauración y preservación del equilibrio ecológico;
- VI.- Expedir la Ley Orgánica del Municipio Libre;
- VII.- Dar las bases normativas a las que deberán sujetarse los ayuntamientos en la expedición de los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, dentro de sus respectivas jurisdicciones;
- VIII.- Aprobar las leyes que regulen su organización y funcionamiento internos;
- IX.- Dictar todas las leyes que sean necesarias para hacer efectivas las atribuciones que esta Constitución otorga a los Poderes del Estado;
- X.- Elaborar su respectivo presupuesto de egresos; el cual deberá incluir los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos, para remitirlo al Ejecutivo para su inclusión en el Presupuesto de Egresos del Estado; asimismo administrarlo y ejercerlo en forma autónoma, en los términos que disponga su Ley Orgánica;
- XI.- Fijar los ingresos y egresos del Estado con base en los presupuestos anuales que el Ejecutivo deberá presentar;
- XII. Expedir las leyes que regulen la organización y facultades de la Auditoría Superior del Estado; así como revisar y examinar, y, en su caso, señalar las irregularidades en las cuentas y actos relativos a la administración, inversión y aplicación de fondos públicos del Estado, de los municipios y sus entidades, así como de los organismos constitucionales autónomos, y proceder en los términos de ley;
- XIII.- Crear y suprimir empleos públicos del Estado. Al aprobar el presupuesto general no podrá dejar de fijar la remuneración que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley; y en el caso de que por cualquier circunstancia omita fijar dicha remuneración, se entenderá por señalada la que hubiere tenido en el presupuesto anterior o en la ley que estableció el empleo;
- XIV.- Autorizar al Gobernador para contratar empréstitos a nombre del Estado, siempre que sean para la ejecución de obras o inversiones de beneficio social, salvo los que contrate en caso de emergencia por causa de desastre, señalando en todo caso los recursos con que deben cubrirse;

XV.- Autorizar al Gobernador, así como a los ayuntamientos, para contratar empréstitos a nombre del Estado, y el Municipio, siempre que se destinen a inversiones públicas productivas, y a su refinanciamiento o reestructura, mismas que se deberán realizar bajo las mejores condiciones del mercado, inclusive los que contraigan los organismos descentralizados, empresas públicas, y fideicomisos; y en el caso del Estado, adicionalmente para otorgar garantías respecto al endeudamiento de los municipios. Lo anterior con base en la ley correspondiente, por los conceptos, y hasta por los montos que el Congreso del Estado apruebe. El Gobernador del Estado informará de su ejercicio al rendir la cuenta pública. En ningún caso se podrán destinar empréstitos para cubrir gasto corriente.

El Congreso del Estado, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, deberá autorizar los montos máximos para, en las mejores condiciones del mercado, contratar dichos empréstitos y obligaciones, previo análisis de su destino, capacidad de pago y, en su caso, el otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de pago.

Sin perjuicio de lo anterior, el Estado o los municipios podrán contratar obligaciones para cubrir sus necesidades a corto plazo, sin rebasar los límites máximos y condiciones que establezca la Ley General que expida el Congreso de la Unión. Las obligaciones a corto plazo deberán liquidarse a más tardar tres meses antes del término del periodo de gobierno correspondiente, y no podrán contratarse nuevas obligaciones durante ese tiempo;

XVI.- Decretar la desafectación de bienes destinados al dominio público y al uso común;

XVII.- Autorizar al Ejecutivo para enajenar bienes inmuebles propiedad del Estado, estableciendo en su caso los términos y condiciones:

XVIII.- Aprobar el Plan Estatal de Desarrollo, en el plazo y con el procedimiento que disponga esta Constitución, y la ley de la materia:

XIX.- Fijar las contribuciones que deban recibir los municipios; establecer anualmente las bases, montos y plazos para la entrega de las participaciones federales que les corresponden y aprobar sus leyes de ingresos, cuotas y tarifas de los servicios públicos, conforme lo establezcan las leyes respectivas;

XX.- DEROGADA

XXI.- Otorgar al Gobernador, por tiempo limitado, facultades extraordinarias en casos de desastre o perturbación grave de la paz pública. Las facultades extraordinarias quedarán precisadas en el decreto respectivo, debiendo aprobar o reprobar los actos emanados del uso de las mismas;

XXII.- Nombrar al Gobernador interino, provisional o substituto en los casos que esta Constitución determina;

XXIII.- Conceder licencias temporales al Gobernador para separarse de su encargo y para ausentarse de la entidad por más de quince días;

XXIV. Recibir el informe escrito del Gobernador del Estado durante la segunda quincena de septiembre de cada año; excepto el último año del ejercicio legal del Gobernador del Estado, que lo recibirá durante la primera quincena del mes de agosto del año que se trate. Cuando el Congreso y el titular del Ejecutivo así lo acuerden, éste comparecerá ante el Pleno de la Legislatura, a fin de que sus miembros le formulen observaciones y cuestionamientos sobre el estado que guarda la administración pública;

XXV.- Solicitar al Ejecutivo la comparecencia de cualquier funcionario de la administración pública estatal para que informe u oriente cuando se discute una ley o se estudie un asunto que se relacione con su función, así como para que informe sobre algún asunto de su competencia.

El Congreso del Estado también podrá solicitar comparecer a los titulares de los organismos constitucionales autónomos que prevé esta Constitución, para los fines previstos en el párrafo primero de esta fracción;

XXVI.- Erigir, suprimir y fusionar municipios tomando en cuenta criterios de orden demográfico, político, social y económico, así como en su caso consultar a la ciudadanía de los municipios interesados a través de plebiscito;

XXVII.- Por acuerdo al menos de las dos terceras partes de sus integrantes, suspender ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que prevenga la Ley Orgánica del Municipio Libre, dándoles la oportunidad para que rindan pruebas y aleguen en su defensa, con pleno respeto a la garantía de audiencia y legalidad;

XXVIII.- Establecer los límites de los municipios del Estado y resolver las diferencias que en esta materia se produzcan sobre las demarcaciones de sus respectivos territorios, excepto cuando estas diferencias tengan un carácter contencioso, así como fijar y modificar la división territorial, administrativa y judicial de la entidad:

XXIX.- Aprobar, en su caso, los convenios que celebre el Ejecutivo en relación con los límites del Estado;

XXX.- Designar Concejos Municipales en los casos y bajo las condiciones que las leyes respectivas establezcan;

XXXI.- Autorizar la enajenación de los bienes municipales y también su gravamen, cuando éste exceda al término de la

administración de un Ayuntamiento;

XXXII.- Autorizar las concesiones que otorguen los ayuntamientos, cuando su vigencia exceda el término de su administración;

XXXIII.- Elegir, en los términos de esta Constitución, a los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, así como a los magistrados del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa;

XXXIV. Ratificar, en los términos de esta Constitución, a dos integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado; y designar a uno más;

XXXV. Elegir, en los términos de esta Constitución, al Fiscal General del Estado; al Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción ; y al Fiscal Especializado en Delitos Electorales; así como a oponerse con el voto de por lo menos las dos terceras partes de sus miembros, a la remoción de estos fiscales;

XXXVI. Nombrar al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y al del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, así como conocer y resolver las solicitudes de destitución de los mismos, en los términos de la presente Constitución.

XXXVII.- Ratificar con el voto de por lo menos la mitad más uno de sus miembros, el nombramiento de Procurador General de Justicia del Estado que le someta el titular del Ejecutivo;

XXXVIII.- Recibir la protesta de ley que ante él deban rendir los servidores públicos;

XXXIX.- Designar el día anterior al de la clausura de cada período de sesiones ordinarias, a los integrantes de la Diputación Permanente que ha de funcionar en el receso del Congreso:

XL- Instaurar los juicios políticos y, en su caso, aplicar las sanciones a que se refiere el Artículo 128 de esta Constitución:

XLI.- Conceder premios y reconocimientos por servicios eminentes e importantes prestados a la humanidad, a la Nación, al Estado o a la comunidad:

XLII.- Trasladar, a solicitud del Ejecutivo, la residencia de los Poderes del Estado cuando sea necesario por circunstancias extraordinarias;

XLIII. Nombrar y remover libremente al Oficial Mayor y a los empleados del Congreso; así como nombrar y remover al Auditor Superior del Estado, en los términos y conforme a los procedimientos previstos en esta Constitución y en la ley.

XLIV.- Calificar las excusas que expongan el Gobernador, diputados al Congreso local y miembros de los ayuntamientos de los municipios del Estado, para no desempeñar los cargos para los que han sido electos;

XLV.- Conceder amnistías e indultos por los delitos del orden común;

	XLVI Cuidar que en los días fijados por las leyes se celebren
	las elecciones que previenen esta Constitución y la Constitución
	Política de los Estados Unidos Mexicanos;
	XLVII En casos de urgencia, dispensar o abreviar los trámites
	legislativos; y
	XLVIII Las demás que la Constitución Política de los Estados
	Unidos Mexicanos, la presente Constitución y las leyes que de
	ellas emanen le atribuyan.
	ARTÍCULO 58 El Congreso del Estado, a través de su
CONGRESO/ INFORME DE ACTIVIDADES	Presidente, rendirá a la ciudadanía un informe de sus
	actividades.(sic) a más tardar el día último de septiembre de
	cada año de ejercicio.
	CAPITULO V
	De la Diputación Permanente
DIPUTACIÓN	ARTÍCULO 59 Durante los recesos del Congreso habrá una
PERMANENTE	Diputación Permanente, que aquel nombrará antes de la
	clausura de sus sesiones ordinarias. La misma será presidida por
	el Presidente de la Directiva del Congreso y se compondrá
	además con cuatro diputados propietarios que conforme al orden
	de su elección, ocuparan los cargos de Vicepresidente,
	Secretario, primer y segundo vocales y dos suplentes quienes
	actuarán en ausencia de los propietarios en el orden que fueran
	electos.
	ARTÍCULO 60 Son atribuciones de la Diputación Permanente:
DIPUTACIÓN PERMANENTE/	I Velar por la observancia de la Constitución y las leyes,
ATRIBUCIONES	informando al Congreso de las infracciones que haya advertido;
	II Convocar al Congreso a periodo extraordinario de sesiones
	cuando así lo demanden las necesidades, urgencias o gravedad
	de las circunstancias, a su juicio o a petición fundada del Titular
	del Ejecutivo del Estado o de alguno de los diputados de la
	Legislatura;
	,
	III Ejercer las facultades conferidas al Congreso en cuanto
	corresponda al nombramiento y toma de protesta del
	Gobernador provisional, así como a la de los funcionarios que
	deban rendirla ante aquél;
	IV Proveer lo necesario para que los asuntos que queden sin
	resolución en los expedientes se sigan tramitando en el periodo
	inmediato de sesiones;
	V Cuidar que en los días fijados por las leyes se celebren las
	elecciones que previenen la Constitución Política de los Estados
	Unidos Mexicanos y esta Constitución;
	VI Reservar, para dar cuenta al Congreso en su próxima
	sesión, todos los asuntos para cuya resolución no esté
	expresamente facultada;
	VII En caso de falta absoluta de los Diputados propietarios,
	llamar a sus suplentes;

	VIII Resolver sobre las renuncias, licencias y permisos que
	competan a la Legislatura;
	IX Autorizar al Gobernador para que se ausente del estado por más de quince días;
	X Recibir, en su caso, la protesta de ley que ante el Congreso
	deban rendir los servidores públicos;
	XI Presidir e instalar la sesión preparatoria de la nueva
	Legislatura y tomar la protesta de ley a los Diputados electos; y
	XII Cumplir con las obligaciones que le impongan la Legislatura
	y las disposiciones legales.
	CAPÍTULO VI
INICIATIVAS DE LEVI	De la Iniciativa y Formación de Leyes
INICIATIVAS DE LEY/ DERECHO DE	ARTICULO 61 El derecho de iniciar leyes corresponde a los
PRESENTACIÓN INICIATIVA	diputados, al Gobernador, al Supremo Tribunal de Justicia, y a
POPULAR	los ayuntamientos, así como a los ciudadanos del Estado.
	Dentro de los primeros quince días de cada periodo ordinario de sesiones, el Gobernador del Estado podrá presentar hasta dos
INICIATIVA PREFERENTE	iniciativas para trámite preferente, o señalar con tal carácter
FREFERENTE	hasta dos que hubiere presentado en periodos anteriores,
	cuando estén pendientes de dictamen. Las iniciativas deberán
	ser dictaminadas, discutidas y votadas por el Pleno del Congreso
	del Estado, en un plazo máximo de cuarenta y cinco días
	naturales. Si no fuere así, en sus términos y sin mayor trámite,
	las iniciativas serán los primeros asuntos que deberán ser
	discutidos y votados en la siguiente sesión del Pleno.
PROCESO LEGISLATIVO/	ARTICULO 62 El Reglamento Interior del Congreso establecerá
REGLAMENTO INTERIOR DEL	la forma en que deban ser presentadas las iniciativas de ley, así
CONGRESO	como el modo de proceder a su admisión y votación.
INICIATIVAS	ARTÍCULO 63 Toda iniciativa de ley que fuere desechada
RECHAZADAS	conforme al Reglamento del Congreso, no podrá volver a ser
	presentada en el mismo período de sesiones.
PROCESO	ARTÍCULO 64 Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de ley, decreto, acuerdo o iniciativa al Congreso de la
LEGISLATIVO/ RESOLUCIONES	Unión.
	ARTÍCULO 65 Para la discusión y votación de todo proyecto de
DIPUTADOS/ QUÓRUM	ley, se necesita la presencia de cuando menos la mayoría
Q O O N O M	absoluta de los Diputados que compongan la Legislatura. Es
	suficiente para las determinaciones, el voto de la mayoría
	absoluta de los concurrentes, a excepción de los casos en que
	se necesiten las dos terceras partes, según lo previsto en la
	presente Constitución.
CONGRESO/	ARTÍCULO 66 El Congreso del Estado podrá solicitar del
REPRESENTANTES DEL EJECUTIVO	Gobernador, del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia o
	de los Presidentes Municipales, la presencia de los titulares de
	las dependencias y entidades, de los Magistrados o de alguno de

	los miembros del ayuntamiento, respectivamente, cuando sea
	necesaria para el estudio de iniciativas de ley o decreto que sean
	de su competencia.
	ARTÍCULO 67 Aprobado un proyecto de ley, se turnará al
PROYECTOS/ OBSERVACIONES	Ejecutivo para su sanción y publicación. El Ejecutivo podrá,
	dentro de los diez días hábiles contados a partir de la fecha en
	que reciba el mismo, devolverlo al Congreso con las
	observaciones que estime pertinentes.
	Si el Ejecutivo hace observaciones al proyecto de ley, el
	Congreso volverá a discutirlo y el Gobernador del Estado podrá
	nombrar un representante para que asista a la discusión a
	responder las observaciones que sobre el particular le presenten
	los Diputados, o a exponer los motivos de aquéllas.
	El Gobernador del Estado no podrá ejercer su derecho de veto
	respecto a las leyes que normen el funcionamiento interno del
	Poder Legislativo.
OBSERVACIONES/	ARTÍCULO 68 Todo proyecto de ley devuelto por el
PROYECTOS	Gobernador del Estado con observaciones, necesita para su
	aprobación del voto de cuando menos las dos terceras partes del
	número de Diputados presentes y, en este caso, se remitirá
	nuevamente al Ejecutivo para que, sin más trámite, sancione y
	publique la ley.
LEYES/	ARTÍCULO 69 La derogación y abrogación de las leyes se hará
DEROGACIÓN O ABROGACIÓN	con los mismos requisitos y formalidades que se necesitan para
	su formación.
DIODOGIONES/	ARTÍCULO 70 Las leyes, reglamentos, circulares, convenios y
DISPOSICIONES/ PUBLICACIÓN	cualquier otra disposición de observancia o interés general,
	deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado y regirán a
	partir de la fecha de entrada en vigor que en las mismas se
	indique.
	ARTÍCULO 71 Las leyes se publicarán bajo la siguiente
LEYES/ FORMALIDADES DE	formalidad:
PUBLICACIÓN	"NN, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de
	San Luis Potosí, a sus habitantes, sabed: Que el Congreso del
	Estado ha decretado lo siguiente. (AQUÍ TEXTO)
	Lo tendrá entendido el Ejecutivo del Estado y lo hará publicar,
	circular y obedecer Fecha y firmas del Presidente y Secretarios
	del Congreso.
	Por tanto, mando se cumpla y ejecute el presente Decreto y que
	todas las autoridades lo hagan cumplir y guardar; y al efecto se
	imprima, publique y circule a quienes corresponda". (Fecha y
	firmas del Gobernador y del Secretario General de Gobierno).
	Ninguna ley tiene carácter obligatorio si no ha sido publicada con
	dicha formalidad.
	TITULO SÉPTIMO
	THULU SEPTIMU

	DEL PODER EJECUTIVO
	CAPITULO I
	Del Gobernador del Estado
PODER EJECUTIVO/	ARTÍCULO 72 El ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en
GOBERNADOR	un solo individuo que se denomina Gobernador Constitucional
	del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí. Su elección
	será directa y en los términos que disponga la Ley Electoral del
	Estado, salvo los casos previstos en la presente Constitución.
GOBERNADOR/	ARTICULO 73 Para ser Gobernador del Estado se requiere:
REQUISITOS	Ser mexicano por nacimiento y ciudadano potosino en pleno
	goce de sus derechos;
	II. Si se tiene la calidad de potosino por nacimiento, contar con
	una residencia efectiva no menor de un año inmediato anterior al
	día de la elección y, si se trata de potosino por vecindad, la
	residencia efectiva deberá se no menor de cinco años contados
	a partir de la adquisición de vecino;
	III. Tener treinta años cumplidos al día de la elección;
	IV. No estar en el servicio activo del ejército Nacional, a menos
	que se separe de su encargo por lo menos un año antes del día
	de la elección;
	V. No ser secretarios o subsecretarios de Estado, Fiscal General
	del Estado, o Presidente Municipal, a menos de que se separe
	de su encargo ciento veinte días antes del día de la elección; VI. No tener una multa firme pendiente de pago, o que
	encontrándose sub júdice no esté garantizada en los términos de
	las disposiciones legales aplicables, que haya sido impuesta por
	responsabilidad con motivo de los cargos públicos que hubiere
	desempeñado en la administración federal, estatal o municipal; y
	no haber sido condenado por sentencia firme por la comisión de
	delitos que hayan ameritado pena de prisión, y
	VII No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de
	algún culto religioso, a menos que se separe formal, material y
	definitivamente de su ministerio en la forma y con la anticipación
	establecida en la Ley Reglamentaria del artículo 130 de la
	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
0005044000/	ARTÍCULO 74 El Gobernador del Estado no podrá durar en su
GOBERNADOR/ CARGO	encargo más de seis años e iniciará su ejercicio el veintiséis de
	septiembre del año de su elección.
COPERMANOR/	ARTÍCULO 75 Al tomar posesión de su cargo, el Gobernador
GOBERNADOR/ PROTESTA DE LEY	del Estado deberá rendir protesta ante el Congreso del Estado,
	en los términos siguientes:
	"PROTESTO GUARDAR Y HACER GUARDAR LA
	CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
	MEXICANOS, LA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Y LAS
	LEYES QUE DE ELLAS EMANEN Y DESEMPEÑAR CON
	LEALTAD Y PATRIOTISMO EL CARGO QUE SE ME

	CONFIERE, PARA BIEN DE LA NACIÓN Y DE ESTE ESTADO Y, SI ASI NO LO HICIERE, QUE EL PUEBLO ME LO DEMANDE".
GOBERNADOR/ NO REELECCIÓN	ARTÍCULO 76 En ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar el cargo de Gobernador del Estado el ciudadano que lo haya desempeñado, así hubiere sido electo por sufragio directo o con el carácter de interino, provisional o sustituto.
GOBERNADOR/ FALTAS TEMPORALES	ARTÍCULO 77 Para cubrir las faltas temporales del Gobernador del Estado, el Congreso o, en su caso, la Diputación Permanente nombrará de inmediato al Gobernador provisional. En caso de falta absoluta del Gobernador del Estado, ocurrida en los dos primeros años del período respectivo, si el Congreso estuviere en sesiones, se constituirá inmediatamente en Colegio Electoral y, concurriendo cuando menos las dos terceras partes del total de sus integrantes, nombrará, en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos, un Gobernador interino. Dentro de los diez días siguientes al de la designación del Gobernador interino, el Congreso expedirá la convocatoria para la elección del Gobernador que debe concluir el período respectivo, debiendo mediar entre la fecha de la convocatoria y la que se señale para la verificación de las elecciones, un plazo no mayor de seis meses. Si el Congreso no estuviere en sesiones, la Diputación Permanente nombrará desde luego un Gobernador provisional y convocará a período extraordinario de sesiones al Congreso, para que éste, a su vez, designe al Gobernador interino y expida la convocatoria a elecciones en los términos del párrafo anterior. Cuando la falta de Gobernador ocurriese en los últimos cuatro años del período respectivo, si el Congreso del Estado se encontrara en sesiones, erigido en Colegio Electoral, designará al Gobernador substituto que deberá concluir el período; si no estuviere reunido, la Diputación Permanente nombrará un Gobernador provisional y convocará al Congreso del Estado a periodo extraordinario de sesiones para que haga la elección del Gobernador substituto correspondiente.
GOBERNADOR ELECTO/ NO PRESENTACIÓN	ARTÍCULO 78 Si al comenzar un período constitucional no se presentara el Gobernador electo o la elección no estuviere hecha y declarada el veintiséis de septiembre, se tendrá entendida la falta absoluta del mismo, caso en el cual deberá procederse en los términos dispuestos por el artículo inmediato anterior de esta Constitución.
GOBERNADOR/ CARGO IRRENUNCIABLE	ARTÍCULO 79. - El cargo de Gobernador del Estado es irrenunciable y el individuo que lo desempeñe sólo podrá separarse del mismo con licencia del Congreso, por causa grave o justificada.

CAPÍTULO II

De las Atribuciones del Gobernador

GOBERNADOR/ ATRIBUCIONES

ARTÍCULO 80.- Son atribuciones del Gobernador del Estado las siguientes:

- I.- Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes del Congreso de la Unión, los tratados internacionales, la presente Constitución y las leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter general que de ellas emanen;
- II.- Promulgar y publicar en el Periódico Oficial del Estado, las leyes, decretos y acuerdos que expida la Legislatura del Estado, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia. El Gobernador del Estado podrá ejercer su facultad de veto ante el Congreso del Estado dentro de los diez días naturales siguientes a aquél en el que haya recibido la ley o decreto. Pasado el término señalado, si el Ejecutivo no tuviere observaciones que hacer, o transcurrido el plazo sin haberlas hecho, lo publicará dentro de los treinta días naturales siguientes. En caso de que el Gobernador del Estado no cumpliera con esta obligación, la ley o decreto se tendrá por sancionado y, el Congreso del Estado, deberá ordenar su publicación.
- III.- Expedir los reglamentos necesarios para la ejecución y cumplimiento de las leyes y decretos del Congreso; así como expedir y publicar decretos y acuerdos de carácter administrativo:
- IV.- Concurrir a la apertura y clausura de los períodos ordinarios y extraordinarios de sesiones del Congreso del Estado o, en su caso, nombrar a un representante;
- V.- Presentar ante el Congreso del Estado, durante la segunda quincena de septiembre de cada año; excepto el último año del ejercicio legal, durante la primera quincena del mes de agosto del año que se trate, un informe por escrito en el que manifieste el estado que guarda la administración pública y, comparecer posteriormente, cuando así lo acuerde con el Poder Legislativo, a fin de responder a las observaciones que los diputados le presenten sobre el particular;

GOBERNADOR/ INFORME TRIMESTRAL

VI. Rendir ante el Congreso del Estado, en forma trimestral y por escrito, a más tardar el día quince del mes siguiente al periodo de que se trate, un estado de información financiera que refleje la situación que guarda la hacienda pública del Estado y, en forma anual, su cuenta pública, la que presentará a más tardar el último día de febrero del año siguiente al que corresponda su ejercicio. Asimismo, deberá rendir en forma trimestral y por escrito, informe y documentación de respaldo sobre el avance programático y presupuestal por cada una de las secretarias y

dependencias de la administración pública estatal, a más tardar dentro de los diez días hábiles siguientes al período que concluya.

- VII. Presentar al Congreso del Estado, a más tardar el día veinte de noviembre de cada año, las correspondientes iniciativas de, Leyes de Ingresos; y del Presupuesto de Egresos, para el siguiente año el cual deberá incluir los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban los servidores públicos de los poderes, Ejecutivo, Legislativo, y Judicial, así como de los organismos constitucionalmente autónomos;
- VIII.- Concurrir al Congreso, cuando éste se lo solicite, a informar sobre alguna iniciativa o a responder a las observaciones que los Diputados le presenten sobre actos de gobierno u otros asuntos de su competencia; o autorizar, en su caso, a algún funcionario del mismo para dichos efectos;
- IX.- Presentar ante el Congreso el Plan Estatal de Desarrollo para su aprobación, dentro de los primeros tres meses de su mandato. Asimismo, informarle anualmente sobre su ejecución, durante la segunda quincena de septiembre de cada año;
- X.- Solicitar a la Diputación Permanente que convoque a período extraordinario de sesiones, cuando así lo estime pertinente o las circunstancias del caso lo ameriten;
- XI.- Designar y remover libremente a los Secretarios de Despacho, así como a los demás servidores públicos del Estado cuyo nombramiento y remoción no estén atribuidos expresamente por esta Constitución a otra autoridad;
- XII.- Proponer al Congreso a los candidatos a ocupar los cargos de, Fiscal General del Estado; Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción; y Fiscal Especializado en Delitos Electorales; así como removerlos por causas graves, y hacerlo del conocimiento del Congreso del Estado para los efectos de la fracción XXXVII del artículo 57 de esta Constitución:
- XIII.- Proponer al Congreso, a los candidatos a ocupar los cargos de magistrados del Supremo Tribunal de Justicia; del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; y designar a un integrante del Consejo de la Judicatura del Estado, de conformidad con la presente Constitución;
- XIV.- Prestar apoyo a los Poderes Legislativo y Judicial y a los Ayuntamientos, cuando le sea solicitado por los mismos para el mejor ejercicio de sus funciones;
- XV.- Fomentar la educación en el Estado, de conformidad con lo establecido por la legislación de la materia;
- XVI.- Ejercer el mando directo y disponer de la policía ministerial y de la de protección social en todo el Estado, así como de la fuerza pública en el municipio donde residiera habitual o

transitoriamente; y otorgar autorización para el funcionamiento de organismos auxiliares de seguridad, en los términos que establezca la ley de la materia;

XVII.- Celebrar convenios con la Federación y los Municipios en materia de operación y ejecución de obra, de administración tributaria y de prestación de servicios públicos;

XVIII.- Enajenar, con la autorización del Congreso, los bienes inmuebles propiedad del Estado;

XIX.- Celebrar y ejecutar actos de dominio sobre bienes muebles propiedad del Estado;

XX.- Con la autorización del Congreso, concertar empréstitos y avalar los que soliciten los Ayuntamientos u otros organismos públicos;

XXI. Organizar el sistema penitenciario en el Estado, siempre sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud, el deporte y las actividades culturales y recreativas, para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir;

XXII.Determinar el lugar y establecimiento donde los sentenciados deban compurgar las penas de prisión impuestas por los jueces o tribunales;

XXIII. Celebrar convenios de carácter general con la Federación, para que los sentenciados por delitos del orden común cumplan su condena en establecimientos dependientes del Poder Ejecutivo Federal o del fuero federal en centros estatales;

XXIV. Asistir a las reuniones de los ayuntamientos a solicitud de los mismos;

XXV. Determinar, en casos urgentes e imprevistos, las medidas que juzgue necesarias para preservar el orden y la seguridad pública en el Estado, dando cuenta inmediata al Congreso;

XXVI. En los casos de riesgo, siniestro o desastre graves, aplicar las medidas que fueren necesarias para hacer frente a estas contingencias, las que serán por tiempo limitado, de carácter general, y únicamente en las zonas afectadas.

En estos casos, también podrá disponer de los recursos públicos que fueren necesarios, sin autorización previa del Congreso del Estado, dando cuenta de inmediato al mismo.

Asimismo, podrá requerir la cooperación y colaboración de los habitantes del Estado;

XXVII.Otorgar y revocar las concesiones y comisiones que le competan;

XXVIII. Someter a la consulta de los ciudadanos del Estado los actos que determine, a través del referéndum, y plebiscito;

XXIX. Representar al Estado en sus relaciones con el Gobierno Federal, con los gobiernos de otros Estados, con los ayuntamientos, y con otros organismos y entidades de derecho

	/
	público y privado, y Las demás que le confieran la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes que de ellas emanen.
GOBERNADOR/ IMPEDIMENTOS	I Dictar providencia alguna que retarde o entorpezca la administración de justicia en el Estado; II Ausentarse del Estado sin permiso del Congreso o de la Diputación Permanente en su caso, por un lapso mayor de quince días naturales; III Obstruir, limitar o imposibilitar, por cualquier medio, el libre ejercicio del Congreso del Estado; IV Disponer la ocupación de la propiedad particular, sin satisfacer los requisitos que marca la ley; V Entorpecer, dificultar, obstaculizar o intervenir, por sí mismo o por medio de servidor público a su mando, en las elecciones populares determinadas por la Constitución o por las leyes respectivas, para que recaigan en determinada persona de conformidad con el artículo 72 de la Ley de Justicia Electoral del Estado, y VI Disponer de los fondos y recursos públicos fuera de los fines que están señalados en esta Constitución y las leyes de la materia. Cuando se trate de Gobernador Provisional, no podrá celebrar
	acto o contrato alguno que grave o comprometa el patrimonio o los servicios públicos del Estado y sus Municipios. Si los celebrara, serán nulos y no producirán efectos legales.
	CAPÍTULO III
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA/ INTEGRACIÓN	Del Despacho del Ejecutivo ARTÍCULO 82 El Gobernador del Estado se auxiliará con las dependencias y entidades que prevea la Ley Orgánica de la Administración Pública, para el despacho de los negocios de su competencia.
	Esta ley determinará las atribuciones de cada una de las dependencias; definirá las bases generales para la creación de entidades paraestatales, así como la intervención del Ejecutivo para su operación; complementariamente, los reglamentos interiores de las dependencias prevendrán su organización, funcionamiento y atribuciones específicas.
LEYES PROMULGADAS/ REFRENDO	ARTÍCULO 83 Todas las leyes promulgadas por el Gobernador deberán ser refrendadas por el Secretario General de Gobierno y sin este requisito no surtirán efectos legales. Para su validez, los decretos, reglamentos, circulares, acuerdos y disposiciones de carácter general que dicte el Gobernador, además del Secretario General de Gobierno, deberán ser firmados por el Secretario del ramo que corresponda.

	ARTÍCULO 84 Los titulares de las dependencias del Ejecutivo
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA/ TITULARES DE	serán responsables de todas las órdenes y providencias que
	autoricen con su firma, así como de toda falta, omisión o
DEPENDENCIAS	violación en que incurran con motivo del ejercicio de sus
	·
	funciones.
	CAPÍTULO IV
	Del Ministerio Público
	ARTICULO 85. DEROGADO
	ARTICULO 86. DEROGADO
	CAPÍTULO V
	De la Consejería Jurídica del Estado
CONSEJERÍA	ARTÍCULO 87 La Consejería Jurídica del Estado estará a
JURÍDICA DEL	cargo de un Consejero que dependerá directamente del titular
ESTADO	del Ejecutivo, quien para serlo deberá cumplir con los requisitos
	que se exigen para ser Magistrado del Supremo Tribunal de
	Justicia.
	El Consejero intervendrá en las controversias y acciones a que
	se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los
	Estados Unidos Mexicanos, cuando se vea afectado el interés
	del Estado o de alguno de sus municipios.
	El Consejero intervendrá en todos los negocios en que el Estado
	sea parte, o en los que sea vea afectado el interés público. A
	solicitud de los ayuntamientos y sus entidades, también podrá
	prestarles la asesoría que requieran.
	La ley y los reglamentos establecerán la organización y las
	atribuciones de la Consejería Jurídica del Estado; las
	atribuciones del Consejero, de las consejerías adjuntas, así
	como los requisitos para ocupar la titularidad de las mismas.
	CAPÍTULO VI
	De la Seguridad Pública
	ARTÍCULO 88 Para la preservación de la tranquilidad y el
SEGURIDAD	
PUBLICA	orden público se organizará la fuerza competente de seguridad
	pública, en los términos y con las corporaciones que establezcan
	las leyes relativas.
	La seguridad pública es una función a cargo del Estado y los
	municipios, que comprende la prevención de los delitos; la
	investigación y persecución para hacerla efectiva; así como la
	sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la
	ley, en las respectivas competencias. La actuación de las
	instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de
	legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y
	respeto a las garantías y los derechos humanos reconocidos en
	esta Constitución.
	Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil,
	disciplinado y profesional; deberán coordinarse entre sí para

cumplir los objetivos de la seguridad pública, y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública en los términos de la Ley General de Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como de la correspondiente ley local en la materia. ARTICULO 89. El personal de las instituciones de seguridad **SEGURIDAD** pública del Estado y los municipios, por la naturaleza de su PÚBLICA/ **INTEGRANTES** función y atendiendo a lo establecido en lo conducente por el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tendrá el carácter de agente depositario de autoridad y su relación con la administración pública será de carácter administrativo y se regirá por sus propias leves. Los agentes del Ministerio Público, los peritos, y el personal de las instituciones policiales del Estado y los municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leves vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado y los municipios sólo estarán obligados a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho sin que, en ningún caso, proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. TÍTULO OCTAVO **DEL PODER JUDICIAL** CAPÍTULO I **Disposiciones Generales** ARTICULO 90. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial del PODER JUDICIAL/ Estado, en un Supremo Tribunal de Justicia, en Juzgados de INTEGRACIÓN Primera Instancia, y en Juzgados Menores. El Poder Judicial contará con el apoyo de Jueces Auxiliares cuando así lo requiera, de conformidad con lo previsto por la ley de la materia. **SUPREMO** El Supremo Tribunal de Justicia funcionará en Pleno o en Salas. TRIBUNAL DE Las sesiones del Pleno en las que se discutan y decidan los JUSTICIA/ **FUNCIONAMIENTO** asuntos jurisdiccionales serán públicas, excepto aquellas que por su naturaleza se considere que deban ser reservadas. CONSEJO DE LA JUDICATURA/ La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del FUNCIONES. Estado, así como la carrera judicial, estarán a cargo del Consejo INTEGRANTES, **REQUISITOS** de la Judicatura, en los términos de esta Constitución y conforme lo establezcan las leyes. La vigilancia respecto de la función jurisdiccional de los magistrados, así como las resoluciones disciplinarias sobre los mismos, estarán a cargo del Pleno del

Supremo Tribunal de Justicia.

El Consejo de la Judicatura Estatal es un órgano del Poder Judicial del Estado, con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones; funcionará en Pleno o en comisiones, y tendrá las atribuciones que determine la ley.

El Consejo se integrará con cuatro miembros, de los cuales uno será el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, quien también lo será del Consejo; uno designado por el Congreso del Estado; otro por el Supremo Tribunal de Justicia; y uno más, por el Titular del Ejecutivo. Los designados por éstos dos últimos, serán ratificados por el Congreso del Estado.

Todos los consejeros deben reunir los requisitos señalados en el artículo 99 de esta Constitución, y ser personas que se hayan distinguido por su capacidad profesional, experiencia y honorabilidad en el ejercicio de sus actividades.

Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables; salvo las que se refieren a la designación, adscripción, remoción y no ratificación de jueces, las cuales podrán ser recurridas ante el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Los consejeros no representan a quien los designa, por lo que ejercerán sus funciones con independencia e imparcialidad. Durante su encargo sólo podrán ser removidos en los términos del Título Décimo Segundo de esta Constitución.

La organización, funcionamiento y demás atribuciones del Consejo de la Judicatura del Estado, serán determinados por la ley, conforme a lo establecido en esta Constitución.

Salvo el Presidente del Consejo, los demás durarán cinco años en su encargo, serán sustituidos de manera escalonada y podrán ser reelectos por una sola vez. Al concluir su periodo tendrán derecho a un haber de retiro consistente en un único emolumento equivalente a un año de salario, sin perjuicio del pago de aguinaldo y vacaciones proporcionales que les correspondan. Dicha remuneración se cubrirá con base en el último salario percibido, siempre y cuando el Consejero no haya sido reelecto, o habiéndolo sido termine el periodo para el cual fue designado; o, padezca incapacidad física o mental que le impida el desempeño del encargo.

El Consejo funcionará en Pleno o en comisiones, y sus decisiones plenarias se tomarán válidamente por mayoría calificada de tres votos.

De conformidad con lo que establezca la ley, el Consejo estará facultado para expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones. El Supremo Tribunal de Justicia podrá solicitar al Consejo, la expedición de aquellos acuerdos que considere necesarios para asegurar un adecuado ejercicio de la función judicial.

El Consejo de la Judicatura determinará el número y

	especialización por materia, de los juzgados y de las salas.
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA/ ATRIBUCIONES	ARTICULO 91. Son atribuciones del Supremo Tribunal de
	Justicia:
	Resolver las controversias judiciales en segunda instancia y
	las demás cuestiones jurisdiccionales de su competencia;
	II. Establecer jurisprudencia en los términos que fije la ley;
	III. Resolver sobre las contradicciones de criterios generales
	sustentados por las salas del Tribunal, sin perjuicio de observar
	la jurisprudencia de los tribunales del Poder Judicial Federal;
	IV. Iniciar leyes o decretos relacionados con la impartición de
	justicia;
	V. Elegir de entre los magistrados a su Presidente, quien
	también lo será del Consejo de la Judicatura; y designar a un
	,
	integrante del Consejo de la Judicatura, en los términos de esta
	Constitución;
	VI. Solicitar al Consejo de la Judicatura el cambio de adscripción
	de jueces y en su caso, su remoción por causa justificada;
	VII. Recibir y en su caso, aceptar la renuncia al cargo de
	Presidente del Tribunal;
	VIII. Calificar las excusas o impedimentos que sus miembros
	presenten para conocer de determinados asuntos, así como de
	las recusaciones con causa que se promuevan en contra de los
	magistrados, en asuntos de la competencia del Pleno;
	IX. Proponer al Consejo de la Judicatura, a través de su
	Presidente, los acuerdos generales y las medidas administrativas
	tendientes a mejorar el registro, control y procedimiento de los
	asuntos que sean tramitados ante el Poder Judicial del Estado,
	procurando la incorporación de métodos modernos para la
	expedita y eficaz impartición de justicia;
	X. Resolver las quejas que supongan responsabilidad
	administrativa, que se presenten en contra de sus integrantes;
	XI. Dictar las medidas necesarias para que la impartición de
	justicia sea pronta y expedita;
	XII. Conocer de los asuntos cuya resolución esté expresamente
	atribuida a su competencia, y
	XIII. Las demás que le confiera la ley.
	ARTICULO 92. El Poder Judicial ejercerá autónomamente su
	presupuesto, a través del Consejo de la Judicatura.
PODER JUDICIAL/ PRESUPUESTO	El presupuesto será formulado por el Consejo de la Judicatura,
	con la aprobación del Supremo Tribunal de Justicia; el cual
	deberá incluir los tabuladores desglosados de las
	remuneraciones que se propone perciban sus servidores
	públicos, y será remitido al Ejecutivo para su inclusión en la
	Iniciativa del Presupuesto de Egresos del Estado, a fin de que
	sea sometido a consideración del Congreso del Estado.
	El Consejo de la Judicatura será responsable de rendir al

	Congreso un informe trimestral del estado financiero y
	anualmente la Cuenta Pública del Poder Judicial del Estado.
PODER JUDICIAL/ NOMBRAMIENTOS	ARTÍCULO 93 Los nombramientos de los funcionarios judiciales serán hechos, preferentemente, de entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la impartición de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica, de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Judicial.
	La Ley establecerá las bases para la formación y actualización de los funcionarios del Poder Judicial, así como para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia.
PODER JUDICIAL/ IMPEDIMENTOS	ARTÍCULO 94 Los funcionarios judiciales estarán impedidos para el libre ejercicio de la abogacía y no podrán desempeñar ningún otro cargo, empleo o comisión públicos o privados, salvo los de docencia y los de carácter honorífico, y percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable.
PODER JUDICIAL/ INFORME DE ACTIVIDADES	ARTICULO 95 . El Supremo Tribunal de Justicia y el Consejo de la Judicatura, deberán rendir en forma anual, a través de su Presidente, un informe público de sus actividades.
	CAPÍTULO II
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA/ INTEGRACIÓN	ARTICULO 96. El Supremo Tribunal de Justicia se integra con dieciséis magistrados numerarios, electos por el voto de cuando menos las dos terceras partes de los diputados presentes del Congreso; además, por quince magistrados supernumerarios. Para su elección, el Gobernador propondrá al Congreso, al triple de personas respecto del número de cargos por cubrir, dentro de los cuales la Legislatura hará la elección respectiva en el término de treinta días. Si vencido ese plazo no se hubiera hecho la elección, el titular del Ejecutivo procederá a hacer el nombramiento de entre las propuestas. En caso de que el Congreso rechace la propuesta, el Gobernador del Estado presentará una nueva en los términos del párrafo anterior; si esta segunda propuesta fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que, dentro de la misma, designe el Gobernador del Estado. Cuando cese o concluya el ejercicio de una magistratura por cualquier causa, el Ejecutivo presentará al Congreso las
	respectivas propuestas.
MAGISTRADOS/ NOMBRAMIENTO	ARTICULO 97. Los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia durarán en su encargo seis años; pudiendo ser ratificados y si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos

en los términos establecidos en la presente Constitución. Para los efectos de la ratificación, el Consejo de la Judicatura integrará la documentación y rendirá un informe con los elementos que permitan al Ejecutivo evaluar el desempeño de los magistrados, para que el Congreso resuelva en su caso, sobre la propuesta de ratificación.

Para ser ratificado se requerirá el voto favorable de cuando menos las dos terceras partes de los miembros del Congreso. En caso contrario se declarará la vacante, debiendo procederse en consecuencia.

El cargo de magistrado en ningún caso podrá ser ejercido después de los setenta y tres años de edad, ni por un periodo mayor de quince años. Al vencimiento de su periodo o término de su función, tendrá derecho a un haber de retiro en los términos que marque la ley.

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA/ MAGISTRADOS SUPERNUMERARIOS

ARTÍCULO 98.- En la misma forma que los Magistrados numerarios, serán nombrados los Magistrados supernumerarios, pudiendo elegirse también dentro de la lista de los propuestos como numerarios. Los Magistrados supernumerarios tendrán las funciones que les asigne la ley y sustituirán, en el orden en que hayan sido nombrados por el Congreso del Estado, a aquéllos en sus faltas temporales y, provisionalmente, en las absolutas. En este último caso, los supernumerarios permanecerán en el desempeño del cargo hasta que tome posesión el Magistrado numerario nombrado para cubrir la vacante.

Sólo los supernumerarios que ejerzan como numerarios formarán parte del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia. Este podrá llamar a los supernumerarios que requiera y asignarles sus funciones.

Los nombramientos de los Magistrados supernumerarios serán por seis años y podrán ser designados, por una sola vez, para un período igual, sin perjuicio de que sean propuestos por el Ejecutivo para ser nombrados numerarios.

MAGISTRADOS/ REQUISITOS

ARTÍCULO 99.- Para ser Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia se requiere:

- I.- Ser mexicano por nacimiento, y ciudadano potosino en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
- II.- Tener cuando menos treinta y cinco años el día de su nombramiento, y no más de setenta y tres años de edad;
- III.- Tener al día de su nombramiento, título profesional de licenciado en derecho con una antigüedad mínima de diez años, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello y acreditar el ejercicio profesional por el mismo tiempo;
- IV.- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que haya ameritado pena privativa de libertad de más de un año; pero, si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de

	confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el
	concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya
	sido la pena;
	V Haber residido en el Estado durante los dos años anteriores
	al día de su nombramiento; y
	VI No haber ocupado el cargo de Secretario de Despacho o su
	equivalente, Fiscal General del Estado, Diputado local, o
	Presidente Municipal en el año inmediato anterior al día de su
	nombramiento.
	Para ser Magistrado supernumerario deberán cumplirse los
	mismos requisitos.
	Los nombramientos de los magistrados deberán recaer
	preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con
	eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia; o
	que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y
	antecedentes en el ejercicio de la profesión del derecho.
	ARTÍCULO 100 El cargo de Magistrado no es renunciable, sino
MAGISTRADOS/ CARGOS	por causa justificada calificada por el Congreso del Estado.
	CAPÍTULO III
	De los Jueces y Tribunales
	ARTICULO 101. En cada Distrito o Región Judicial, que
JUECES DE PRIMERA	comprenderán los municipios que establezca la Ley Orgánica del
INSTANCIA Y	Poder Judicial, habrá los jueces y tribunales que determine el
JUECES MENORES/ CONFORMACIÓN	Consejo de la Judicatura, los que conocerán de los negocios
	judiciales que les competan. La ley establecerá la forma de cubrir
	sus faltas temporales.
JUECES DE	ARTICULO 102. Los jueces serán nombrados, removidos,
PRIMERA	ratificados y adscritos por el Consejo de la Judicatura, con base
INSTANCIA/ NOMBRAMIENTO	en criterios objetivos y de acuerdo a los requisitos que
NOMBINAMENTO	establezca la ley para la carrera judicial. Durarán cinco años en
	el ejercicio de su encargo, al término de los cuales, si fueran
	ratificados, sólo podrán ser privados de sus puestos en los casos
	y conforme a los procedimientos que establezca la ley.
	El cargo de juez no podrá ejercerse después de los setenta y
	tres años de edad. Al término de su función tendrá derecho al
	haber de retiro que marque la ley.
JUECES DE	ARTÍCULO 103 Para ser Juez se requiere:
PRIMERA	I Ser ciudadano potosino en pleno ejercicio de sus derechos
INSTANCIA/ REQUISITOS	civiles y políticos;
	II Tener cuando menos veintiocho años de edad al día de su
	designación;
	III Tener, al día de su nombramiento, título profesional de
	licenciado en derecho con antigüedad mínima de cinco años,
	expedido por autoridad o institución legalmente facultada para
1	ello y acreditar el ejercicio profesional por el mismo tiempo; y

	IV Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por
	delito que haya ameritado pena privativa de libertad de más de
	un año; pero, si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de
	confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el
	concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya
	sido la pena.
JUZGADOS	ARTICULO 104. En el Estado habrá juzgados menores. El
MENORES/	Consejo de la Judicatura determinará su número conforme a las
INTEGRANTES	necesidades del servicio. Sus facultades, obligaciones y
	competencia por materia y cuantía, serán establecidas por la ley,
	y la territorial corresponderá fijarla al Consejo de la Judicatura.
WZCADOS	ARTICULO 105. Los jueces menores serán nombrados por el
JUZGADOS MENORES/	Consejo de la Judicatura, mediante examen de oposición,
NOMBRAMIENTOS	conforme preceptúe la ley secundaria. El Consejo de la
	Judicatura podrá separarlos de su cargo o cambiarlos de
	adscripción.
	ARTÍCULO 106 Para ser Juez Menor se requiere:
JUEZ MENOR/	I Ser ciudadano potosino en pleno ejercicio de sus derechos
REQUISITOS	1
	políticos y civiles;
	II Tener cuando menos veinticinco años de edad;
	III Tener, al día de su nombramiento, título profesional de
	licenciado en derecho con antigüedad mínima de dos años,
	expedido por autoridad o institución legalmente facultada para
	ello y acreditar el ejercicio profesional por el mismo tiempo; y
	IV Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por
	delito que haya ameritado pena privativa de libertad de más de
	un año; pero, si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de
	confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el
	concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya
	sido la pena.
	CAPÍTULO IV
	De los Jueces Auxiliares
	ARTÍCULO 107 Habrá Jueces Auxiliares en todas las
JUECES	poblaciones que señale la ley y sus atribuciones serán las que
AUXILIARES	ésta determine.
JUECES	ARTICULO 108. Los jueces auxiliares serán nombrados por el
AUXILIARES/	Consejo de la Judicatura, a elección que las comunidades
NOMBRAMIENTO	hagan, de conformidad con lo establecido por la ley de la
	materia, la que determinará también los requisitos para
	desempeñar el cargo y la duración del mismo.
	TÍTULO NOVENO
	DEL PATRIMONIO Y DE LA HACIENDA PUBLICA DEL
	ESTADO
	CAPÍTULO I
ECTADO/	Del Patrimonio
ESTADO/	1

	7-
PATRIMONIO	ARTÍCULO 109 El patrimonio del Estado se compone de los bienes que son de su propiedad y de los que adquiera conforme a la ley; del producto de las contribuciones decretadas por el Congreso; de los bienes vacantes y mostrencos que estén en su territorio; de los créditos que tenga a su favor; así como de los subsidios y de las participaciones en el rendimiento de las contribuciones federales que deba percibir de acuerdo a las leyes. Son inalienables e imprescriptibles los bienes afectos a un
	servicio público. Los bienes desafectados de un servicio público y que pasen a dominio privado del Estado, podrán ser enajenados previa autorización del Congreso, mediante los requisitos que señale esta Constitución y la ley reglamentaria
	respectiva.
PATRIMONIO DEL ESTADO/ BIENES QUE LO INTEGRAN	ARTÍCULO 110 Los bienes que integran el patrimonio del Estado son: I Del dominio público: a) Los de uso común;
	b) Los destinados por el Gobierno del Estado a los servicios
	públicos;
	c) Los inmuebles y muebles de valor histórico y cultural que se
	encuentren dentro de su territorio y que no sean propiedad de la
	Nación o de propiedad privada;
	d) Las aguas que corren dentro del territorio del estado que no sean propiedad de la Nación, en los términos del artículo 27, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que se localicen en dos o más predios;
	e) Los cauces, vasos y riberas de las corrientes de aguas
	estatales; f) Los terrenos ganados natural y artificialmente a los ríos estatales, arroyos o corrientes, lagos y lagunas de jurisdicción estatal; y
	g) Los demás que señalen las leyes respectivas; y
	II Del dominio privado, los que ingresen a su patrimonio no
	comprendidos en la fracción anterior y aquellos que, de
	conformidad con las leyes, sean desafectados de un servicio
	público.
	CAPÍTULO II
	De la Hacienda Pública
HACIENDA PÚBLICA/ INTEGRACIÓN	ARTÍCULO 111 La Hacienda Pública del Estado se integra con
	los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos que
	decreten las leyes fiscales estatales; con las participaciones de
	ingresos federales que establezcan las leyes y convenios de
	coordinación; y con todos los bienes que forman su patrimonio
	en los términos del artículo 110 de esta Constitución.
	ARTÍCULO 112 La ley determinará la forma en que debe

HACIENDA PÚBLICA/ RECAUDACIÓN	hacerse la recaudación de los ingresos públicos.
HACIENDA PÚBLICA/ RECAUDACIÓN, PAGOS NO PREVISTOS	ARTÍCULO 113 La Secretaría del ramo hará la recaudación de los ingresos públicos y efectuará los pagos del Estado de acuerdo con las Leyes de Ingresos y de Presupuesto de Egresos que la Legislatura del Estado decrete para cada ejercicio fiscal y de conformidad a las leyes de la materia. No se hará pago alguno que no esté previsto en la Ley del Presupuesto de Egresos.
	TÍTULO DÉCIMO
	DEL MUNICIPIO LIBRE CAPÍTULO I
	De los Municipios del Estado
MUNICIPIOS/ ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO, BASES	ARTÍCULO 114 El Municipio Libre constituye la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado y tendrá a su cargo la administración y gobierno de los intereses municipales, conforme a las bases siguientes: I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de
AYUNTAMIENTOS/ INTEGRACIÓN	elección popular directa. La competencia del gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva, y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. Los ayuntamientos se compondrán por un presidente
AYUNTAMIENTOS/ REELECCION DE SUS INTEGRANTES	municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine, electos popularmente por votación directa, quienes podrán reelegirse por un período adicional por el mismo carago. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubiere postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Cuando se trate de
MUNICIPIOS/ PATRIMONIO	Presidentes Municipales y los integrantes de la planilla electos como candidatos independientes, sólo podrán ser reelectos con esta misma calidad. Las personas que, por elección indirecta o por nombramiento o designación de alguna autoridad, desempeñen la función propia de sus cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé, podrán ser reelectas para el período inmediato siguiente. II Los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberá expedir la Legislatura del Estado, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

- El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer:
- a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad;
- b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los ayuntamientos, para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al período del Ayuntamiento;
- c) Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren tanto las fracciones III y IV de este artículo, como el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
- d) El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o servicio municipal, cuando al no existir el convenio correspondiente, la Legislatura estatal, previa solicitud que le sea presentada por el Ayuntamiento respectivo aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes, considere que el municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos, y
- e) Las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos correspondientes.

La Legislatura estatal emitirá las normas que establezcan los procedimientos, mediante los cuales se resolverán los conflictos que se presenten entre los municipios y el gobierno del Estado, o entre aquéllos, con motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) anteriores;

- III. Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:
- a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;
- b).- Alumbrado público;
- c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;
- d).- Mercados y centrales de abasto;
- e).- Panteones;
- f).- Rastro:
- g) Calles, parques, jardines y su equipamiento;
- n) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, policía preventiva municipal y tránsito;
- i).- Cultura y recreación; y
- j).- Los demás que el Congreso del Estado determine, según las

AYUNTAMIENTOS/ FUNCIONES Y SERVICIOS PÚBLICOS

condiciones territoriales y socioeconómicas de los municipios, pudiendo tener el concurso del Estado respecto de los mismos, cuando así fuere necesario y lo determinen las leyes secundarias.

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales.

Cuando un Municipio, por causas excepcionales, no pueda proporcionar los servicios que esta Constitución y las leyes secundarias señalen, el Ejecutivo del Estado podrá asumir la prestación de los mismos total o parcialmente, según sea el caso, previa la aprobación del Congreso y por el tiempo estrictamente necesario.

Los municipios del Estado, previo el acuerdo entre sus ayuntamientos y con sujeción a la ley, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de la asociación de municipios de dos o más Estados, deberán contar con la aprobación de las respectivas legislaturas de los Estados. Asimismo, cuando a juicio de los ayuntamientos sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o través (sic) del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio Municipio.

MUNICIPIOS/ ADMINISTRACIÓN HACENDARIA

La policía preventiva municipal estará al mando del Presidente Municipal, en los términos del reglamento correspondiente. Aquélla acatará las órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público;

- IV.- Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que el Congreso establezca a su favor y, en todo caso:
- a).- Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezca el Estado sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio del valor de los inmuebles.

Los Municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de alguna de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones;

b).- Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios, con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente determine el Congreso del Estado;

c).- Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.

Las leyes locales no establecerán exenciones o subsidios respecto a los ingresos a que se refieren los incisos a) y c), en favor de persona ni de institución alguna. Sólo los bienes del dominio público de la Federación, de los Estados o de los municipios estarán exentos de dichas contribuciones, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.

Los ayuntamientos en el ámbito de su competencia, propondrán a la Legislatura del Estado las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones, que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

MUNICIPIOS/ FACULTADES El Congreso del Estado aprobará las leyes de ingresos de los municipios a más tardar el quince de diciembre de cada año; revisará y fiscalizará sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que percibirán los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto por el artículo 133 de ésta constitución.

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley.

Las remuneraciones de los miembros de los ayuntamientos serán determinadas por el Cabildo en sus respectivos presupuestos de egresos;

- V. Los municipios en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para:
- a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal;
- b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales:
- c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o el Estado elaboren proyectos de desarrollo regional, deberán asegurar la participación de los municipios;

MUNICIPIOS/ CENTROS URBANOS

- d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales;
- e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;
- f) Otorgar licencias y permisos para construcciones:

MUNICIPIOS/ CONVENIOS

- g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas, y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia;
- n) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial; e
- i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales.

En lo conducente y de conformidad con los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios;

AYUNTAMIENTOS/ ATRIBUCIONES EXPRESAS, ELECCIÓN

- VI.- Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas, formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, los Municipios intervendrán en la planeación de dichos centros, en forma conjunta y coordinada con la Federación, entidades federativas y demás municipios interesados, con apego a la ley federal de la materia:
- VII.- El Estado estará facultado para celebrar convenios con los Municipios, a efecto de que éstos asuman la prestación de los servicios o la atención de las funciones a que se refiere el artículo 80 fracción XVII de esta Constitución;
- VIII.- Los Municipios estarán facultados para celebrar convenios con el Gobierno del Estado a efecto de que éste asuma la prestación de servicios públicos de su competencia.
- Asimismo podrán concesionar, con autorización del Congreso del Estado, de manera parcial o total, los servicios públicos a su cargo, a excepción de los de seguridad pública y tránsito, en los términos previstos en la Ley Orgánica del Municipio Libre;
- IX.- Cada Municipio deberá llevar y mantener actualizado el catastro de propiedad, industria, profesión o trabajo de sus habitantes, en los términos del artículo 36, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
- X.- Los Ayuntamientos sólo tendrán las atribuciones que expresamente les confieren esta Constitución y las leyes que de ella emanen. La ley definirá las responsabilidades en que incurran con motivo del ejercicio de sus cargos; y
- XI.- Los Ayuntamientos serán electos cada tres años. Se integrarán con un Presidente, hasta con dos Síndicos y con Regidores de mayoría relativa y de representación proporcional en los términos del artículo 115, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quienes tendrán las mismas facultades y obligaciones que los Regidores de mayoría relativa, conforme lo disponga la ley de la materia.

ARTÍCULO 115.- Los Ayuntamientos no podrán celebrar acto o

MUNICIPIOS/	andrete element and annual ann
LIMITACIONES	contrato alguno que grave o comprometa los bienes y servicios públicos de los Municipios, sin tener la autorización del Congreso del Estado dada conforme a la ley; los cuales, en su defecto,
	serán nulos de pleno derecho. Aprobado el presupuesto municipal de egresos por el Cabildo, se
	dispondrá por el Presidente Municipal su publicación en el
	Periódico Oficial del Estado, a más tardar el quince de enero de
	cada ejercicio anual.
MUNICIPIOS/	ARTÍCULO 116 Los Ayuntamientos podrán someter a plebiscito
PLEBISCITO	los actos que por su trascendencia requieran la aprobación de
	los habitantes del Municipio, de conformidad con el
	procedimiento y términos precisados en la ley de la materia.
	CAPÍTULO II
	De los Requisitos para ser Miembro del Ayuntamiento,
	Concejo Municipal o Delegado
INTEGRANTES	ARTÍCULO 117 Para ser miembro del Ayuntamiento, Concejo o
AYUNTAMIENTOS/	Delegado Municipal, se requiere:
REQUISITOS	Ser ciudadano potosino en pleno goce de sus derechos;
	II. Ser originario del municipio y con un año por lo menos de
	residencia efectiva en el mismo, inmediata anterior al día de la
	elección o designación, en su caso; o ser vecino del mismo, con
	residencia efectiva de tres años inmediata anterior al día de la
	elección, o designación, y
	III. No tener una multa firme pendiente de pago, o que
	encontrándose sub júdice no esté garantizada en los términos de
	las disposiciones legales aplicables, que haya sido impuesta por
	responsabilidad con motivo de los cargos públicos que hubiere
	desempeñado en la administración federal, estatal o municipal; y
	no haber sido condenado por sentencia firme por la comisión de
	delitos dolosos que hayan ameritado pena de prisión.
	Los Síndicos reunirán además los requisitos previstos en la ley
	orgánica respectiva, y
	IV Cuando se trate de Presidentes Municipales y los integrantes
	de la planilla electos como candidatos independientes, sólo
	podrán ser reelectos con esta misma calidad. Las personas que,
	por elección indirecta o por nombramiento o designación de
	alguna autoridad, desempeñen la función propia de sus cargos,
	cualquiera que sea la denominación que se les dé, podrán ser
	reelectas para el período inmediato siguiente.
AYUNTAMIENTOS/	ARTÍCULO 118 Están impedidos para ser miembros
INTEGRANTES IMPEDIDOS	propietarios o suplentes de los ayuntamientos:
IIIII LDIDOG	I El Gobernador del Estado;
	II. Los secretarios, subsecretarios o el Fiscal General del Estado;
	los titulares de organismos descentralizados o desconcentrados
	de la administración; o a los que esta Constitución otorga
	autonomía;

III.- Los miembros de las Fuerzas Armadas que estén en servicio activo o que tengan mando en el Estado, así como los que ejerzan cargo y atribuciones de mando de policía en el municipio respectivo;

IV. Los magistrados y secretarios del Tribunal Electoral del Estado; El Consejero Presidente o los consejeros electorales del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el secretaria ejecutivo, o personal profesional directivo del propio Consejo, salvo que se hubiere separado de su encargo tres años antes del día de la elección;

V.- Los ministros de culto religioso, y

VI. Los Magistrados y Jueces del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

VII No ser titular de alguno de los organismos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga autonomía, ni titular de alguno de los organismos descentralizados o descentralizados de la administración pública federal:

VIII No ser titular de alguno de los organismos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga autonomía, ni titular de alguno de los organismos descentralizados o descentralizados de la administración pública federal;

IX No ser titular de alguno de los organismos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga autonomía, ni titular de alguno de los organismos descentralizados o descentralizados de la administración pública federal;

X No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo tres años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate, y

XI No ser Senador, Diputado Federal o Diputado Local.

Estarán impedidos los ciudadanos a que se refieren las fracciones, I, II, III, VII, IX, y XI de este artículo, a menos que se separen de sus funciones noventa días antes del día de la elección. Los ministros de culto deberán hacerlo con la anticipación y en la forma establecida en la Ley reglamentaria del artículo 130 de la Constitución Federal.

Los síndicos reunirán además los requisitos previstos en la ley orgánica respectiva.

CAPÍTULO III

De la Formación, Fusión y Supresión de Municipios y Delegaciones Municipales

MUNICIPIOS/ ERIGIR O SUPRIMIR ARTÍCULO 119.- Para erigir o suprimir un Municipio, Delegación o Cabecera Municipales, el Congreso del Estado tomará en cuenta, además de lo previsto en el artículo 57, fracción XXVI, de la presente Constitución, el cumplimiento de los requisitos que

	prevenga la Ley Orgánica del Municipio Libre.
DELEGACIONES MUNICIPALES	ARTÍCULO 120 En las Delegaciones Municipales la autoridad
	será ejercida por un Delegado Municipal, quien será designado
	por el respectivo Ayuntamiento, conforme a lo establecido en la
	Ley Orgánica del Municipio Libre, la cual señalará sus
	atribuciones y responsabilidades.
	CAPÍTULO IV
	De la Suspensión y Desaparición de Ayuntamientos y de la
	Suspensión y Revocación del Mandato de Alguno de sus
	Integrantes
AYUNTAMIENTOS/	ARTÍCULO 121 Para declarar la suspensión o desaparición de
PROCEDIMIENTO	un Ayuntamiento, así como suspender o revocar el mandato de
SUSPENSIÓN Y DESAPARICIÓN	alguno de sus integrantes, se requerirá el voto de por lo menos
	las dos terceras partes de los miembros del Congreso del
	Estado, previa audiencia de los afectados.
	Procede declarar desaparecido un Ayuntamiento cuando el
	cuerpo edilicio se haya desintegrado, o cuando no sea legal o
	materialmente posible el ejercicio de sus funciones conforme al
	orden constitucional.
	Son causas para la suspensión de un Ayuntamiento las
	siguientes:
	I Inobservancia a las leyes;II No prestar los servicios públicos que tiene a su cargo o
	prestarlos en forma ineficiente, debido a negligencia o ineptitud;
	1.
	y III Cualquier otra consignada en las leyes.
	ARTÍCULO 122 En caso de declararse suspendido o
AYUNTAMIENTOS/ CONSECUENCIAS	desaparecido un Ayuntamiento, el Congreso designará, de entre
SUSPENSIÓN Y	los vecinos, un Concejo Municipal, que concluirá el período
DESAPARICIÓN	respectivo, si la causal se da después de un año de ejercicio del
	período constitucional para el que fue electo; en caso de que
	esta circunstancia se presente dentro del primer año del ejercicio
	constitucional, el Concejo Municipal designado gobernará el
	municipio hasta en tanto se celebre la respectiva elección
	extraordinaria de Ayuntamiento y tome posesión la planilla que
	haya resultado electa. El mismo procedimiento se observará si
	ocurre la renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus
	integrantes, si no procediere que entren en funciones los
	suplentes.
	Igualmente, el Congreso del Estado designará un Concejo
	Municipal que concluirá el período respectivo, determinando los
	cargos correspondientes, en los siguientes casos:
	I Si al comenzar un período los integrantes del Ayuntamiento
	electo no se presentan a tomar posesión de su encargo;
	II Cuando no se hayan celebrado elecciones;
	III Cuando las elecciones se hubieran anulado;

- IV.- Cuando ninguna planilla hubiese sido declarada electa, y
- V.- Cuando por cualquier otra causa no logre integrarse legalmente el Ayuntamiento.

En todos los casos señalados en este artículo, invariablemente si el supuesto se da dentro del primer año del período constitucional correspondiente, el Consejo Estatal Electoral deberá convocar a la elección extraordinaria de Ayuntamiento.

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO DE LA JUSTICIA PENAL CAPÍTULO ÚNICO

DERECHO A LA JUSTICIA PENAL **ARTÍCULO 122 BIS.** En San Luis Potosí todas las personas tienen derecho a la justicia penal, y el Estado deberá garantizar el acceso efectivo a ella.

El Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General del Estado, como órgano público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio; así como de autonomía presupuestal, técnica y de gestión.

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO La Fiscalía General del Estado estará a cargo del Fiscal General del Estado, que durará en su encargo siete años, sin posibilidad de reelección, y deberá cumplir los mismos requisitos que esta Constitución exige para ser Magistrado.

FISCAL GENERAL DEL ESTADO/ NOMBRAMIENTO Corresponde al Gobernador del Estado proponer al Congreso, al triple de personas para ocupar el cargo del Fiscal General del Estado, dentro de los cuales la Legislatura hará la elección en el término de treinta días y por el voto de cuando menos las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión correspondiente. Si vencido ese plazo no se hubiera hecho la elección, el titular del Ejecutivo procederá a hacer el nombramiento de entre las propuestas.

En caso de que el Congreso rechace la propuesta, el Gobernador del Estado presentará una nueva terna en los términos del párrafo anterior; si esta segunda propuesta fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que, dentro de la misma, designe el Gobernador del Estado.

El Fiscal General sólo podrá ser removido por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, por las causas graves que establezca la ley, la remoción podrá ser objetada por el voto de cuando menos las dos terceras partes de los miembros del Congreso del Estado, dentro de un plazo de diez días hábiles posteriores a que el Ejecutivo haga de su conocimiento la remoción, en cuyo caso, el Fiscal General será restituido en el ejercicio de sus funciones. Si el Congreso del Estado no se pronuncia al respecto, se entenderá que no existe objeción y podrá el Ejecutivo iniciar el procedimiento de la elección del nuevo titular de la Fiscalía en términos de los párrafos anteriores.

Para efecto de lo dispuesto en los párrafos anteriores de este

	artículo, si el Congreso del Estado se encontrare en receso, la Diputación Permanente lo convocará de inmediato a periodo extraordinario.
	Las ausencias temporales del Fiscal General se suplirán en los términos que determine la ley.
	ARTÍCULO 122 TER. Corresponde al Ministerio Público la
MINISTERIO PÚBLICO/ COMPETENCIA	investigación y la persecución ante los tribunales, de todos los delitos del fuero común; para ello contará con facultades para solicitar las medidas cautelares contra los imputados; buscar y
	presentar las pruebas que acrediten la participación de éstos en hechos que las leyes señalen como delito; procurará que los juicios en materia penal se sigan con toda regularidad para que
FISCAL GENERAL	la impartición de justicia sea pronta y expedita; pedirá la aplicación de las penas, e intervendrá en todos los asuntos que la ley determine.
DEL ESTADO/ COMPOSICIÓN	La Fiscalía General contará, al menos, con las fiscalías especializadas en delitos relacionados con hechos de corrupción, y en materia de delitos electorales; los titulares de las mismas serán electos y removidos en los mismos términos que para el caso del Fiscal General del Estado; los titulares de las demás fiscalías, así como los servidores públicos de esa institución, serán designados y removidos por el Fiscal General en los términos que la ley determine.
	La ley establecerá un servicio profesional de carrera que reglamente las bases para el ingreso, permanencia, ascensos, formación, profesionalización, y actualización de los servidores públicos de la Fiscalía, regido por los principios de, legalidad, objetividad, eficiencia, mérito, profesionalismo, honradez y
	respeto a los derechos humanos El Fiscal General presentará anualmente a los poderes, Legislativo; y Ejecutivo, un informe escrito de sus actividades y, en su caso, comparecerá personalmente al Congreso del Estado a informar sobre su gestión.
	TÍTULO DECIMOSEGUNDO
	DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA
	Del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa
	ARTÍCULO 123 La justicia administrativa se deposita en el
TRIBUNAL ESTATAL	Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, que conocerá y
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	resolverá las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la administración pública estatal o municipal y
	sus organismos descentralizados, estatales y municipales e
	intermunicipales y los particulares, dotado de plena jurisdicción y
	autonomía para dictar sus fallos, con competencia en todo el
	territorio estatal. La ley establecerá su organización,
	funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra
	sus resoluciones.

El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa es el órgano competente para imponer las sanciones a los servidores públicos locales y municipales por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves, y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves, así como fincar a los responsables, el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública Estatal o municipal, o al patrimonio de los entes públicos estatales o municipales.

Los Magistrados deberán reunir los mismos requisitos que para ser Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, debiendo además contar con experiencia en materia administrativa y fiscal. Serán designados por el Congreso del Estado en la misma forma y términos que establece el artículo 96 de la presente Constitución. Los Magistrados durarán en su cargo diez años y no podrán ser ratificados; y sólo podrán ser removidos de sus cargos por las causas graves que señale la ley, con la misma votación requerida para su nombramiento.

TÍTULO DECIMOTERCERO DE LAS RESPONSABILIDADES, JUICIO POLITICO, Y SISTEMA ANTICORRUPCION CAPÍTULO ÚNICO

SERVIDORES PÚBLICOS/ RESPONSABILIDAD

GOBERNADOR/ RESPONSABILIDAD ARTÍCULO 124.- Se entiende por servidores públicos: los representantes de elección popular; los titulares del Supremo Tribunal de Justicia, y demás Tribunales del Estado; los titulares de los organismos autónomos reconocidos por esta Constitución; los funcionarios y empleados, y, en general, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública, estatal o municipal, incluyendo sus entidades; quienes serán responsables de los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

El Gobernador del Estado, mientras permanezca en el desempeño de su encargo, podrá ser acusado por actos u omisiones que perjudiquen el buen despacho, o los intereses públicos fundamentales, ello mediante juicio político, e imponérsele las sanciones previstas por esta Constitución.

La responsabilidad del estado por los daños que con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezca la ley.

Los servidores públicos que establezca la ley, estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración, patrimonial, y de intereses, ante las autoridades competentes, y en los términos que determine la ley.

SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

ARTICULO 124 BIS. El Sistema Estatal Anticorrupción es el conjunto de autoridades, elementos, programas y acciones, que interactúan entre sí, para el diseño, evaluación de políticas de educación, concientización, prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como la promoción de la integridad pública. Para el cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas:

- I. El Sistema contará con un Comité Coordinador integrado por los titulares de la Auditoría Superior del Estado; de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; del órgano interno de Control del Gobierno del Estado; por el Presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; y el Presidente del Organismo Garante que establece el artículo 17 fracción III de esta Constitución; así como por un representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, y otro del Comité de Participación Ciudadana, y
- II. El Sistema contará, a su vez, con un Comité de Participación Ciudadana integrado por el número de ciudadanos que establezca la normatividad aplicable, que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción, y serán designados en términos de la legislación correspondiente.

SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICULARES/ RESPONSABILIDAD

ARTÍCULO 125.- Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente:

- I.- Cuando, en el ejercicio de sus funciones, los servidores públicos a que alude el artículo 126 de esta Constitución incurran en actos u omisiones que perjudiquen el buen despacho o los intereses públicos fundamentales, se les impondrán, mediante juicio político, las sanciones a que alude el propio precepto;
- II.- La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particulares que incurran en hechos de corrupción sancionada en los términos de la legislación aplicable.

Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en las que se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten substancialmente su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Se sancionará con el decomiso y la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan;

III.- Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en los

términos que establezca la ley.

Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior del Estado y los órganos internos de control, o por sus homólogos en los municipios, según corresponda; y serán sancionadas por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Las demás faltas y sanciones administrativas, serán del conocimiento y sancionadas por los órganos internos de control.

Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial del Estado, se observará lo previsto en el artículo 90 de esta Constitución, sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoría Superior del Estado en materia de fiscalización, sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos.

Los entes públicos estatales y municipales tendrán órganos internos de control con las facultades que determine la ley, y

IV. El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa impondrá a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades, las sanciones económicas; inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos. Las personas morales serán sancionadas en los términos de esta fracción, cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a nombre, o en representación de la persona moral y en beneficio de ella. También podrá ordenarse la suspensión de actividades. intervención o disolución de la sociedad respectiva, cuando se trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a la hacienda pública o a los entes públicos, siempre que la sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite la participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves; en estos supuestos, la sanción se ejecutará hasta que la resolución sea definitiva. Las leyes establecerán procedimientos para la investigación e imposición de las sanciones aplicables de dichos actos u omisiones.

JUICIO POLÍTICO/ PROCEDIMIENTO

ARTICULO 126. Podrán ser sujetos de Juicio Político en el Estado, los diputados, magistrados, consejeros de la Judicatura, jueces de Primera Instancia, secretarios de Despacho, Fiscal General del Estado, fiscales especializados, en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, y en delitos electorales, subsecretarios, directores generales o sus equivalentes de las dependencias y entidades paraestatales y

paramunicipales, titulares de los organismos constitucionales autónomos, así como los presidentes municipales, regidores y síndicos.

Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.

El Congreso del Estado aplicará las sanciones a que se refiere este precepto, previa declaración de procedencia emitida por cuando menos el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, después de haber substanciado el procedimiento respectivo con audiencia del inculpado.

En los casos a que se refiere el segundo párrafo del Artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recibidas las constancias por el Congreso y previa la integración de cualquier otro elemento que se considere necesario, procederá a imponer la sanción correspondiente, aplicando para ello las disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y en los términos del párrafo anterior. Tratándose del Gobernador del Estado se actuará conforme lo dispone el artículo 128 de esta Constitución.

Las declaraciones y resoluciones del Congreso no son recurribles.

DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA/ PROCEDIMIENTO

ARTICULO 127. En los casos a que se refiere el artículo 111, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recibidas las constancias por el Congreso del Estado, y previa la integración de cualquier otro elemento pertinente, se remitirán a las autoridades federales competentes para que actúen conforme a la ley. Tratándose del Gobernador del Estado, se procederá en los términos del artículo 128 de esta Constitución.

Si la sentencia fuese absolutoria, será rehabilitado en los términos que dispone la ley.

GOBERNADOR/ RESPONSABILIDAD, CONSTITUCIÓN FEDERAL PROCEDIMIENTO

ARTÍCULO 128.- Por lo que se refiere al Gobernador del Estado, en el supuesto del artículo 110 párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recibidas las constancias por el Congreso Local, procederá a imponer las sanciones correspondientes aprobadas por el voto de cuando menos las dos terceras partes del Congreso del Estado, aplicando las disposiciones conducentes de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

SERVIDORES PÚBLICOS/ RESPONSABILIDAD, REVOCACIÓN DE MANDATO

ARTÍCULO 129.- En los supuestos del artículo 124 de esta Constitución, la Legislatura del Estado, previa la substanciación del procedimiento respectivo, resolverá lo conducente por el voto de cuando menos las dos terceras partes del total de sus miembros.

	Si el fallo determina la responsabilidad, el efecto inmediato será
	la revocación del mandato constitucional.
	La separación del encargo no libera de la responsabilidad penal
	en que hubiere incurrido el acusado.
JUICIO POLÍTICO/ VIGENCIA	ARTÍCULO 130 El procedimiento de juicio político sólo podrá
	iniciarse durante el período en que el servidor público
	desempeñe su cargo y dentro del año siguiente.
	Las sanciones correspondientes se aplicarán en un período no
	mayor de tres meses a partir del inicio del procedimiento.
	TÍTULO DECIMOCUARTO
	PREVENCIONES GENERALES
	CAPÍTULO ÚNICO
TRABAJADORES DEL ESTADO	ARTÍCULO 131 Las relaciones laborales de los trabajadores al
DEE EOIADO	servicio de las autoridades estatales y municipales, serán
	reguladas por la ley de la materia expedida por el Congreso del
	Estado con base en lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
	ARTÍCULO 132 Ninguna persona puede desempeñar a la vez
SERVIDORES	dos cargos de elección popular, pero la electa puede optar entre
PÚBLICOS/ INCOMPATIBILIDAD	ambos el que quiera desempeñar. Jamás podrán reunirse en una
	misma persona dos empleos públicos por los que disfrute sueldo,
	exceptuando los del ramo de educación.
	Los servidores públicos deberán atender de tiempo completo las
	funciones de su encargo y no podrán desempeñar empleos o
	trabajos particulares que motiven conflictos de interés en relación
	a sus cargos.
	Los funcionarios de elección popular que, sin causa justificada o
	sin la correspondiente licencia, faltaren al desempeño de sus
	funciones, quedan privados de los derechos de ciudadano y de
	todo empleo público, por el tiempo que dure su comisión.
050//00050	ARTÍCULO 133 Los servidores públicos del Estado, de los
SERVIDORES PÚBLICOS/	municipios, de sus entidades y dependencias, así como de sus
REMUNERACIÓNES	administraciones paraestatales, intermunicipales, y
	paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones de
	organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán
	una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño
	de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser
	proporcional a sus responsabilidades.
	Los salarios de los servidores públicos serán fijados en los
	presupuestos respectivos, sin que su cuantía pueda ser
	disminuida durante la vigencia de éstos, sujetándose a lo
	dispuesto en el artículo 127 de la Constitución General de la
	República, y en las leyes aplicables en el Estado.
	Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente,
	en los presupuestos de egresos correspondientes, sin que su

cuantía pueda ser disminuida durante la vigencia de éstos, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de la Constitución General de la República, en las leves aplicables en el Estado, y bajo las siguientes bases: I. Se considera remuneración o retribución, toda percepción en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, efectivo o en gratificaciones, premios, recompensas, bonos. estímulos. comisiones, compensaciones y cualquier otra; con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo, y los gastos de viaje en actividades oficiales: II. Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Gobernador del Estado en el presupuesto correspondiente; III. Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico; salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, que su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función; la suma de dichas retribuciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el gobernador del Estado, en el presupuesto correspondiente. IV. No se concederán, ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo, o condiciones generales de trabajo. Estos conceptos no formarán parte de la remuneración. Quedan excluidos los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado; V. Las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, y deberán especificar y diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables, tanto en efectivo, como en especie, y VI. La Legislatura del Estado expedirá las leyes para sancionar penal y administrativamente, las conductas que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido en este artículo. **ARTÍCULO 134.-** Todo funcionario, antes de tomar posesión de **SERVIDORES** su empleo, hará la protesta de guardar la Constitución Política de PÚBLICOS/ PROTESTA DE LEY los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leves emanadas de ambas y desempeñar fielmente sus deberes. Si son de los que han de ejercer autoridad, además deberán rendir protesta de hacerlas guardar. **ARTÍCULO 135.** Los recursos económicos de que dispongan los poderes del Estado, sus entidades descentralizadas, los ESTADO/ USO DE

LOS RECURSOS ECONÓMICOS

organismos constitucionales autónomos, y los ayuntamientos, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

La Auditoría Superior del Estado, y las contralorías de los poderes, Legislativo, Ejecutivo, y Judicial, así como de los ayuntamientos, y de los organismos constitucionales autónomos, en el ámbito de sus competencias, vigilarán el estricto cumplimiento de esta disposición, y evaluarán el ejercicio de los recursos económicos, con el fin de propiciar que éstos se incluyan en los respectivos presupuestos.

ESTADO/ LICITACIONES PÚBLICAS

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de toda clase de bienes; la prestación de servicios de cualquier naturaleza; y la contratación de obra, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria abierta para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado, organismos constitucionales autónomos, y ayuntamientos, las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado, organismos constitucionales autónomos, y ayuntamientos.

Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en los términos del Título Décimo Segundo de esta Constitución.

PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Los servidores públicos del Estado, organismos constitucionales autónomos, y sus ayuntamientos, tienen, en todo tiempo, la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los organismos constitucionales autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública, y cualquier otro ente de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso dicha propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos

	párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.
	ARTÍCULO 136 Ni el Congreso ni autoridad alguna pueden
ACCIÓN POPULAR/ SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL	
	dispensar la observancia de esta Constitución. Se concede
	acción popular para denunciar la infracción de ella, en cualquiera
	de sus artículos.
	TÍTULO DECIMOQUINTO
	DE LAS REFORMAS E INVIOLABILIDAD A LA
	CONSTITUCION.
	CAPÍTULO I
CONSTITUCIÓN/	De las Reformas
REFORMAS	ARTÍCULO 137 Los funcionarios que, según el artículo 61 de
	esta Constitución, tienen derecho de iniciativa, lo tienen,
	igualmente, de iniciar las reformas a esta Constitución.
CONSTITUCIÓN/ REFORMAS O	ARTÍCULO 138 Esta Constitución puede ser adicionada o
	reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte
ADICIONES	de la misma, se requerirá su aprobación por el voto de por lo
	menos las dos terceras partes del número total de los diputados,
	y el voto posterior de la mayoría de los Ayuntamientos del
CONSTITUCIÓN	Estado.
REFORMAS/	Los ayuntamientos tendrán un plazo no mayor de dos meses
AYUNTAMIENTOS	para pronunciarse a favor o en contra de las adiciones o
	reformas que les sean enviadas por el Congreso; este plazo
	comenzará a partir de la recepción de las mismas. De no
	pronunciarse en el plazo estipulado se les tendrá por conformes
	con los términos y, por tanto, aprobadas las adiciones o reformas
	enviadas por el Congreso.
	Una vez cumplida cualquiera de las hipótesis señaladas en los
	párrafos anteriores, el Congreso del Estado, o la Diputación
	Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de los
	ayuntamientos y la declaración de haber sido aprobadas las
	adiciones o reformas.
	Tratándose de reformas o adiciones ordenadas por la
	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que
	deban constar en la presente Constitución, únicamente se
	requerirá la aprobación de cuando menos las dos terceras partes
	del número total de los diputados, para que éstas formen parte
	de la misma.
	CAPÍTULO II
	De la Inviolabilidad
CONSTITUCIÓN/ SUPREMACÍA	ARTÍCULO 139 La presente Constitución no perderá su fuerza
	ni vigencia aún cuando por cualquier causa se interrumpa su
	observancia. En caso de que por algún trastorno público se
	establezca en el Estado un gobierno contrario a sus principios o
	a los de la Constitución Política de los Estados Unidos
	a ios de la Constitución Fontida de los Estados Officios

Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis de Política Interior

Mexicanos, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia.
TRANSITORIOS



